



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras nº 1 – 15006  
(Edificio Real Fábrica de Tabacos – Plaza de la Palloza)  
Telf.: 881.881.678 / Fax: 881.881.679  
jepcoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

**Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. – 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **“Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.**- Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en “La Opinión de A Coruña” el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- I.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participan o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes



públicos durante el período electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente período electoral.

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: “Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000” y “EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos”, por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el período electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: “TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI”, y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade “La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinversión del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA”, parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomenta públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo





## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este período de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante.”

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL



Fdo. Lorenzo Villalpando Lucas

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 05/02/2020 10:11:42

**SAIDA****1632/20**

D. Miguel A Delgado González,  
Plataforma en Defensa del Sector  
Marítimo Pesquero de Galicia  
(PLADESEMAPESGA)  
C/Juan castro Mosquera 28, 2º Dcha  
15.505 A Coruña

**Reclamante:** D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)

**Expediente.** Nº RSCTG 151/2019

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO DA RESOLUCIÓN DA COMISIÓN DA TRANSPARENCIA NA RECLAMACIÓN PRESENTADA AO AMPARO DO ARTIGO 28 DA LEI 1/2016, DO 18 DE XANEIRO, DE TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

En resposta ao seu correo electrónico que tivo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o día 8 de xaneiro de 2020, polo incumprimento da Resolución da Comisión da Transparencia de data 18 de decembro de 2019, comunícolle que a dita Resolución foi notificada á Secretaría Xeral de Medios o día 3 de xaneiro de 2020. Transcorrido o prazo dado na Resolución, no día de hoxe procedo a remitirlle á Dirección Xeral de Medios un recordatorio de cumprimento, así como solicitude de informe sobre a situación do expediente no prazo de 10 días previsto no artigo 80.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Así mesmo indícolle que respecto ao dereito de acceso á información a Lei 1/2016, carece dunha regulación fronte as consecuencias desfavorables derivadas dos incumprimentos da normativa ou da falta de execución das resolucións emitidas, lembrándolle o seu dereito a interpor o recurso contencioso-administrativo, nos termos indicados na resolución do expediente RSCTG 151/2019.

76706870F MARIA  
DOLORES  
FERNANDEZ (R:  
S6500009C)

Firmado digitalmente por  
76706870F MARIA DOLORES  
FERNANDEZ (R: S6500009C)  
Fecha: 2020.02.05 10:04:12  
+01'00'

María Dolores Fernández Galiño  
Presidenta da Comisión da Transparencia.



**Asunto:** Remisión solicitudes dirixidas á Comisión de Transparencia de Galicia - REXEL-  
nº rexistro 2019/2568704, 2019/2568927, 2019/2569031 e 2019/2570064

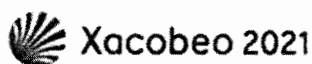
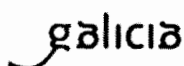
**De:** Presidencia, Secretaría Xeral <secretariaxeral.presidencia@xunta.gal>

**Fecha:** 02/01/2020 10:46

**Para:** "'transparencia@valedordopobo.gal'" <transparencia@valedordopobo.gal>

Achegamos a documentación dirixida á Comisión de Transparencia de Galicia, que tivo entrada na Secretaría Xeral da Presidencia o 30 de decembro de 2019 ( nº de Rexistro 2019/2568704, 2019/2568927, 2019/2569031 e 2019/2570064), para os efectos oportunos.

Secretaría Xeral da Presidencia



**XUNTA DE GALICIA**  
PRESIDENCIA  
Secretaría Xeral da Presidencia

**AVISO LEGAL**

Esta mensaxe pode conter información confidencial. Se vostede non é a persoa destinataria desta mensaxe informámoslle que en virtude da lexislación vixente non está autorizada/o a lelo, difundilo nin copialo. Se recibiu esta mensaxe por erro, rogámoslle que proceda a súa destrución e o comunique ao remitente. Calquera uso adicional deste correo está estritamente prohibido.

**AVISO LEGAL**

Este mensaje puede contener información confidencial. Si usted no es la persona destinataria de este mensaje le informamos que en virtud de la legislación vigente no está autorizada/o a leerlo, difundirlo ni copiarlo. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que proceda a su destrucción y lo comunique al remitente. Cualquier uso adicional de este correo está estrictamente prohibido.

**LEGAL NOTE**

This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message you are hereby informed that according to the current legislation you are not authorized to read, disseminate or copy it. If you have received this message in error please delete it and notify it to the sender. Any additional use of this e-mail is strictly prohibited.

— Adjuntos: —

OFICIO.pdf	62,7 KB
28.12.2019-16.12 H Miguel Ángel Delgado.zip	5,2 MB
→ 29.12.2019-13.54 H Miguel Ángel Delgado González.zip	2,0 MB
29.12.2019-19.50 H Miguel Ángel Delgado González.zip	1,2 MB
30.12.2019-09.39 H Miguel Angel Delgado Gonzalez.zip	1,0 MB

Dilixencia para facer constar que este documento é  
reproducción fiel e exacta dos documentos que figuran  
no expediente RSCTG 1/20

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 02/01/2020 11:41:44

**ENTRADA 21/20**

Firmado digitalmente por EMILIO

LÓPEZ AGRA - 33259651H

Fecha: 2020.07.20 12:12:42 +02'00'



PROCEDEMENTO

**PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO**

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

**PR004A****DATOS DA PERSOA SOLICITANTE**

NOME/RAZÓN SOCIAL

Miguel Angel

PRIMEIRO APELIDO

Delgado

SEGUNDO APELIDO

González

NIF

32413124Y

TIPO DE VÍA

RÚA / CALLE

NOME DA VÍA

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

NÚMERO

28

BLOQUE

ANDAR

2

PORTA

d

PARROQUIA

A Coruña

LUGAR

A Coruña

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

Coruña (A)

A Coruña

TELÉFONO

630389871

FAX

TELÉFONO MÓBIL

630389871

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@xornalgalicia.com

**E, NA SÚA REPRESENTACIÓN** (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

**DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN**

Notifíquese a:

☒ Persoa ou entidade solicitante☐ Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

**ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE**

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

☒ **Electrónica** a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, <https://notifica.xunta.gal>. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.☐ **Postal** (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

A Coruña

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

**ASUNTO RELACIONADO**Para remitir a la Comisión de Transparencia de Galicia  
Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia reclamacions@comisiondatransparencia.gal  
ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expone.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICE:





**NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE**

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

**EXPÓN:**

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

PRIMERO.- El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

**Polo tanto, SOLICITA:**

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión. Firmado: Miguel Delgado González

**DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA**

solicitud-TransparenciaGalicia.pdf




## COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á  
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

☐

NIF da entidade solicitante

☐

## INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento	Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento	A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta do cidadán.
Lexitimación para o tratamento	O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina <a href="https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos">https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos</a> e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos	As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos	As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información	<a href="https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais">https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais</a>

**Actualización normativa:** no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

## LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

## SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

29

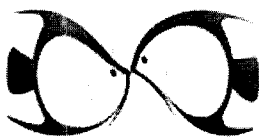
de

decembro

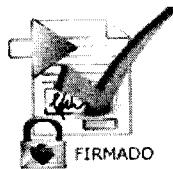
de

2019





**Pladesemapesga**  
Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

**Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.**

En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia  
[reclamacions@comisiondatransparencia.gal](mailto:reclamacions@comisiondatransparencia.gal)

ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expone.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

**PRIMERO.-** El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión.

Firmado: Miguel Delgado González

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) y [info@pladesemapesga.com](mailto:info@pladesemapesga.com).

**Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia**

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

**AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>

**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172338	26-10-2019 20:27	Secretaría Xeral da Presidencia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

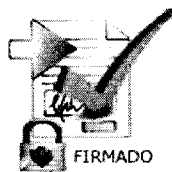
Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A







**Pladesemapesga**  
Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE**  
**DELGADO**  
**GONZALEZ MIGUEL**  
**ANGEL - 32413124Y**  
Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=32413124Y, sn=DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y, cn=DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Fecha: 2019.10.26 20:12:53 +02'00'

**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

**Secretaria de Medios Presidencia Xunta de Galicia**

**Presidencia - Secretaría Xeral de Medios**

**Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra**

Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela

**TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281 FAX: 981-541277 E-MAIL: [info.cata@xunta.es](mailto:info.cata@xunta.es)**

**En su faceta de Secretaria de Medios - y responsable de la totalidad de los servicios de información y comunicación de la Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre Retegal.+, AMTEGA..+, Secretaría de Medios Xunta..+, EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN..+, CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+, Porto de A Coruña..+, Fundación Camilo José Cela..+, y responsable de la imagen de las webs [www.ppdegalicia.com](http://www.ppdegalicia.com) y [www.feijoo.gal](http://www.feijoo.gal) y del PP de Galicia..+ .**

**Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expone.**

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documentol y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose **¡ es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carácter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado N° 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las

resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..



Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PÚBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arrojando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en pinueza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación.....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online - correo ... <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;



Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 52.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) y [info@pladesemapesga.com](mailto:info@pladesemapesga.com).

**Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia**

<https://rgi.cnmec.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

**La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

**AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el**

**Número Registro: 539622127908-83**

europa.eu <http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>



## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172338	26-10-2019 20:27	Secretaría Xeral da Presidencia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBAADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A



**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172335	26-10-2019 20:20	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	52F08C01E3CE345D5689B8ED1F5112D7E8196CCBE697 1EE4F0A5BBC2A2A4B62F
Documento acreditativo da representación	peticion-alfonsorueta.pdf	3E0EF8F0B933E5D2834178FE34BAA54A4C2E895AE036 7B4E87B38CC71ED6A616





## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172337	26-10-2019 20:24	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	8D20C48EABF7C5319A840DEF11F506D63902FD67055 8A469B157AFF94FF0288
Documento acreditativo da representación	peticion-asesoriajuridica-xunta.pdf	09DC4A9D5A0EA0646EB45501B72C1FB689BA4D99A5D 131C3B9E6DA747183F37E







## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras nº 1 – 15006  
(Edificio Real Fábrica de Tabacos – Plaza de la Palloza)  
Telf. 881 881 678 / Fax. 881 881 679  
jepcoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

#### **Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. – 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **“Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.-** Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en “La Opinión de A Coruña” el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participan o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el período electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente período electoral.

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a la los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: “Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000” y “EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos”, por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el período electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: “TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI”, y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade “ La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinención del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA”, parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomenté públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo





## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este período de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante.”

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Vallalpando Lucas



**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

Id Cendoj: **15030330022018100439**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **2**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **4166/2018**

Nº de Resolución: **507/2018**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

**EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por haber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencia del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para





decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se constriñe a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibile que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada ( sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado ( sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.



La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999 ), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000 ), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización ».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

*b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*

*c) A la libertad de cátedra.*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*

*2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.*

*3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.*

*4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.*

*5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".*

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.

Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que "...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que *"no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible"* (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que *"la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejercita tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.

**TERCERO.- Costas procesales.**

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

**FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

- 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.
- 2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
- 3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".
- 4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
- 5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente **D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ** al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.



## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2568927	29-12-2019 13:54	SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude	Solicitude-PR004A-20191229.pdf	46CCC821EDB51B46793463EA72E1BEA0DED3DBE7099 2E4E9759E1512BE4F1C37
Outros documentos acreditativos ou relativos a situacións	solicitud-TransparenciaGalicia.pdf	5A692B3A4672270A0AD6271423A472ED81B3B4323F23 C1000530541233DB796A





RSCG 1/20

**XUNTA  
DE GALICIA**

galicia

**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
<b>2019/2568927</b>	<b>29-12-2019 13:54</b>	<b>SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA</b>

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude	Solicitude-PR004A-20191229.pdf	46CCC821EDB51B46793463EA72E1BEA0DED3DBE7099 2E4E9759E1512BE4F1C37
Outros documentos acreditativos ou relativos a situacións	solicitud-TransparenciaGalicia.pdf	5A692B3A4672270A0AD6271423A472ED81B3B4323F23 C1000530541233DB796A

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 03/01/2020 13:41:52

**ENTRADA 61/20**



PROCEDEMENTO

**PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO**

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

**PR004A**

**DATOS DA PERSOA SOLICITANTE**

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Miguel Angel

Delgado

González

32413124Y

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

RÚA / CALLE

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

28

2

d

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

A Coruña

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

Coruña (A)

A Coruña

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

630389871

prensa@xornalgalicia.com

**E, NA SÚA REPRESENTACIÓN** (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

**DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN**

Notifíquese a:

☒ Persoa ou entidade solicitante

☐ Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

**ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE**

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

☒ **Electrónica** a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, <https://notifica.xunta.gal>. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

☐ **Postal** (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

A Coruña

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

**ASUNTO RELACIONADO**

Para remitir a la Comisión de Transparencia de Galicia

Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.

En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia [reclamacions@comisondatransparencia.gal](mailto:reclamacions@comisondatransparencia.gal)

**ASUNTO;** Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expondrá.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

**NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE**

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

**EXPÓN:**

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

PRIMERO.- El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

**Polo tanto, SOLICITA:**

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión. Firmado: Miguel Delgado González

**DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA**

solicitud-TransparenciaGalicia.pdf



### COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á  
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

☐

NIF da entidade solicitante

☐

### INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento	Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento	A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta do cidadán.
Lexitimación para o tratamento	O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina <a href="https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos">https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos</a> e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos	As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos	As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información	<a href="https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais">https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais</a>
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.	

### LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

### SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

29

de

decembro

de

2019



**Pladesemapesga**

Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE**

**DELGADO  
GONZALEZ MIGUEL  
ANGEL - 32413124Y**

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ  
MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES,  
serialNumber=32413124Y, sn=DELGADO GONZALEZ,  
givenName=MIGUEL ANGEL, o=DELGADO  
GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Fecha: 2019.12.29 13:17:54 +01'00'

**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

**Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.**

**En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia**  
**[reclamacions@comisiondatransparencia.gal](mailto:reclamacions@comisiondatransparencia.gal)**

ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expondrá.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

**PRIMERO.-** El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión.

Firmado: Miguel Delgado González

Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmec.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172338	26-10-2019 20:27	Secretaría Xeral da Presidencia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A







**Pladesemapesga**

Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE**

**DELGADO  
GONZALEZ MIGUEL  
ANGEL - 32413124Y**

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ  
MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,  
serialNumber=32413124Y, uri=DELGADO GONZALEZ,  
givenName=MIGUEL ANGEL, cn=DELGADO GONZALEZ  
MIGUEL ANGEL - 32413124Y  
Fecha: 2019.10.26 20:12:53 +02'00'

**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

## **Secretaria de Medios Presidencia Xunta de Galicia**

**Presidencia - Secretaría Xeral de Medios**

***Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra***

Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela

**TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281 FAX: 981-541277 E-MAIL: [info.cata@xunta.es](mailto:info.cata@xunta.es)**

**En su faceta de Secretaria de Medios** - y responsable de la totalidad de los servicios de información y comunicación de la Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre Retegal.+, AMTEGA..+, Secretaría de Medios Xunta..+, EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN..+, CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+, Porto de A Coruña...+, Fundación Camilo José Cela..+, y responsable de la imagen de las webs [www.ppdeg Galicia.com](http://www.ppdeg Galicia.com) y [www.feijoo.gal](http://www.feijoo.gal) y del PP de Galicia..+ .

**Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expondrá.**

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documentol y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

**SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.**

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose **; es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carcter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las

resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..

Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PÚBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arropando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en piteza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación.....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos **nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online - correo ...** <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;



Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el**

**Número Registro: 539622127908-83**

europa.eu <http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>



## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
<b>2019/2172338</b>	<b>26-10-2019 20:27</b>	<b>Secretaría Xeral da Presidencia</b>

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios- abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A





## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172335	26-10-2019 20:20	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	52F08C01E3CE345D5689B8ED1F5112D7E8196CCBE697 1EE4F0A5BBC2A2A4B62F
Documento acreditativo da representación	peticion-alfonsoruada.pdf	3E0EF8F0B933E5D2834178FE34BAA54A4C2E895AE036 7B4E87B38CC71ED6A616







## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172337	26-10-2019 20:24	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	8D20C48EABF7C5319A840DEF11F506D63902FD67055 8A469B157AFF94FF0288
Documento acreditativo da representación	peticion-asesoriaxuridica-xunta.pdf	09DC4A9D5A0EA0646EB45501B72C1FB689BA4D99A5D 131C3B9E6DA747183F37E





## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras nº 1 - 15006  
(Edificio Real Fábrica de Tabacos - Plaza de la Palloza)  
Telf. 881 881 678 / Fax. 881 881 679  
jepcoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

**Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. - 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **"Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.-** Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en "La Opinión de A Coruña" el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO ALDEENÇA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participen o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el periodo electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente periodo electoral

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a la los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: “Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000” y “EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos”, por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el periodo electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: “TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI”, y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade “ La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinención del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA”, parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomenté públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI. junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este periodo de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante.”

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Vallalpando Lucas





**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

Id Cendoj: **15030330022018100439**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **2**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **4166/2018**

Nº de Resolución: **507/2018**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

#### **T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

#### **EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

#### **SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASEALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por haber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencias del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para

decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se constriñe a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibile que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada ( sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado ( sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.



La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización ».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

*b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*

*c) A la libertad de cátedra.*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.



Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que *"...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que "la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejercita tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.





### TERCERO.- Costas procesales.

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

#### FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectiva de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.

3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".

4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 07/01/2020 14:52:25

**SAIDA 161/20**

**Secretaría Xeral de Medios  
Presidencia da Xunta de Galicia  
Edificio Administrativo San Caetano  
15781 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

**Expediente RSCTG 1/2020**

**Asunto: Recurso potestativo para a obtención de información pública**

Con data do 2 de xaneiro de 2020, tivo entrada no Valedor do Pobo un escrito de reclamación ante a Comisión da Transparencia de Galicia presentado por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña,

De conformidade co disposto no artigo 7. m) do Regulamento interno, aprobado o 14 de xuño de 2016 (DOG nº 134 de 15 de xullo de 2016), e vista a documentación, remítolle xunto a este escrito copia da documentación presentada. Prégolle que, tal e como prevé a lexislación vixente<sup>1</sup>, informe a esta Institución e achegue o expediente -copia completa e ordenada - para o seu estudo por parte da Comisión de Transparencia de Galicia.

O informe deberá centrarse na existencia da solicitude, os trámites realizados, as alegacións dirixidas á ese departamento e a información pública obxecto da solicitude tal e como contempla a Lei 1/2016.

Deberá terse en conta que de conformidade coa disposición adicional primeira da Lei 19/2013, cando exista unha normativa específica reguladora do acceso á información, será esta a que deba aplicarse a aqueles que teñan a condición de interesados nun procedemento administrativo en curso para acceder aos documentos que se integren no mesmo. De ser este o caso deberá igualmente indicalo no seu informe.

---

<sup>1</sup> Artigo 24.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, para as reclamacións perante o Consello de Transparencia e Bo Goberno (art. 28.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo Goberno)

Indícolle así mesmo, que en aplicación do artigo 24 da Lei 19/2013, se se ten producido denegación do acceso á información, e fose debido á protección de dereitos ou intereses de terceiros deberá advertilo expresamente, con información do seu enderezo, a esta Comisión para que se poida dar trámite de audiencia á persoa que puidera resultar afectada para que alegue o que a seu dereito conveña.

De non recibir resposta no prazo de dez días, e ao abeiro a normativa de aplicación<sup>2</sup>, continuarase a tramitación do expediente.

76706870F MARIA	Firmado digitalmente por
DOLORS	76706870F MARIA DOLORS
FERNANDEZ (R:	FERNANDEZ (R: S6500009C)
S6500009C)	Fecha: 2020.01.07 13:55:53
	+01'00'

M<sup>a</sup> Dolores Fernández Galiño

**Presidenta da Comisión da Transparencia**

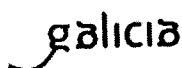
---

<sup>2</sup> Artigo 121 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

**Asunto:** Remisión solicitudes dirixidas á Comisión de Transparencia de Galicia - REXEL-  
nº rexistro 2019/2568704, 2019/2568927, 2019/2569031 e 2019/2570064  
**De:** Presidencia, Secretaría Xeral <secretariaxeral.presidencia@xunta.gal>  
**Fecha:** 02/01/2020 10:46  
**Para:** '"transparencia@valedordopobo.gal"' <transparencia@valedordopobo.gal>

Achegamos a documentación dirixida á Comisión de Transparencia de Galicia, que tivo entrada na Secretaría Xeral da Presidencia o 30 de decembro de 2019 ( nº de Rexistro 2019/2568704, 2019/2568927, 2019/2569031 e 2019/2570064), para os efectos oportunos.

Secretaría Xeral da Presidencia



Xacobeo 2021



**XUNTA DE GALICIA**  
**PRESIDENCIA**  
Secretaría Xeral da Presidencia

**AVISO LEGAL**

Esta mensaxe pode conter información confidencial. Se vostede non é a persoa destinataria desta mensaxe informámoslle que en virtude da lexislación vixente non está autorizada/o a lelo, difundilo nin copialo. Se recibiu esta mensaxe por erro, rogámoslle que proceda a súa destrución e o comunique ao remitente. Calquera uso adicional deste correo está estritamente prohibido.

**AVISO LEGAL**

Este mensaxe puede contener información confidencial. Si usted no es la persona destinataria de este mensaje le informamos que en virtud de la legislación vigente no está autorizada/o a leerlo, difundirlo ni copiarlo. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que proceda a su destrucción y lo comunique al remitente. Cualquier uso adicional de este correo está estrictamente prohibido.

**LEGAL NOTE**

This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message you are hereby informed that according to the current legislation you are not authorized to read, disseminate or copy it. If you have received this message in error please delete it and notify it to the sender. Any additional use of this e-mail is strictly prohibited.

— Adjuntos: —

OFICIO.pdf	62,7 KB
28.12.2019-16.12 H Miguel Ángel Delgado.zip	5,2 MB
→ 29.12.2019-13.54 H Miguel Ángel Delgado González.zip	2,0 MB
29.12.2019-19.50 H Miguel Ángel Delgado González.zip	1,2 MB
30.12.2019-09.39 H Miguel Angel Delgado Gonzalez.zip	1,0 MB

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 02/01/2020 11:41:44

**ENTRADA 21/20**



PROCEDIMENTO

**PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓN QUE NON CONTEN CUN SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO**

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

**PR004A****DATOS DA PERSOA SOLICITANTE**

NOME/RAZÓN SOCIAL		PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF		
Miguel Angel		Delgado	González	32413124Y		
TIPO DE VÍA	NOME DA VÍA		NÚMERO	BLOQUE	ANDAR	PORTA
RÚA / CALLE	Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha		28		2	d
PARROQUIA			LUGAR			
A Coruña			A Coruña			
CP	PROVINCIA	CONCELLO	LOCALIDADE			
15005	CORUÑA (A)	Coruña (A)	A Coruña			
TELÉFONO	FAX	TELÉFONO MÓBIL	CORREO ELECTRÓNICO			
630389871		630389871	prensa@xornalgalicia.com			

**E, NA SÚA REPRESENTACIÓN** (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL	PRIMEIRO APELIDO	SEGUNDO APELIDO	NIF

**DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN**Notifíquese a: ☒ Persoa ou entidade solicitante ☐ Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL	CORREO ELECTRÓNICO
630389871	prensa@xornalgalicia.com

**ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE**

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

☒ **Electrónica** a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, <https://notifica.xunta.gal>. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.☐ **Postal** (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

TIPO DE VÍA	NOME DA VÍA	NÚMERO	BLOQUE	ANDAR	PORTA
	Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha				
PARROQUIA		LUGAR			
A Coruña		A Coruña			
CP	PROVINCIA	CONCELLO	LOCALIDADE		
15005					

**ASUNTO RELACIONADO**Para remitir a la Comisión de Transparencia de Galicia  
Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia [reclamacions@comisiondatransparencia.gal](mailto:reclamacions@comisiondatransparencia.gal)  
ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expone.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:



**NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE**

**CÓDIGO DO PROCEDEMENTO**

**EXPÓN:**

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

**PRIMERO.-** El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

**Polo tanto, SOLICITA:**

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión. Firmado: Miguel Delgado González

Data e hora: 29-12-2019 13:54

**DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA**

solicitud-TransparenciaGalicia.pdf




## COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á  
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

NIF da entidade solicitante

## INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento	Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento	A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta do cidadán.
Lexitimación para o tratamento	O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina <a href="https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos">https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos</a> e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos	As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos	As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información	<a href="https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais">https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais</a>
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.	

## LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

## SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

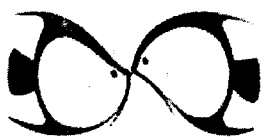
29

de

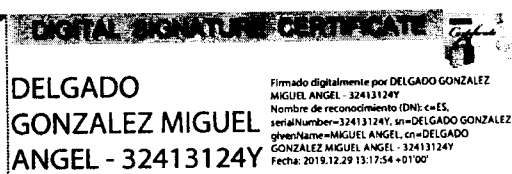
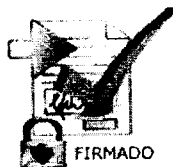
decembro

de

2019



**Pladesemapesga**  
Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

**Sra. Doña María Dolores Fernández Galiño.**

En su condición de Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia  
[reclamacions@comisiondatransparencia.gal](mailto:reclamacions@comisiondatransparencia.gal)

ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaría de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026 (3) como se expondrá.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Que damos por reproducido la totalidad del expediente que anexamos en sus documentos adjuntos.

**PRIMERO.-** El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor.

Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia.

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión.

Firmado: Miguel Delgado González

Acerca del PLADESEMAPESSGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G 70321807 - Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarias, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca que comporten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) y [info@pladesemapesga.com](mailto:info@pladesemapesga.com).

Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmec.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESSGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172338	26-10-2019 20:27	Secretaría Xeral da Presidencia

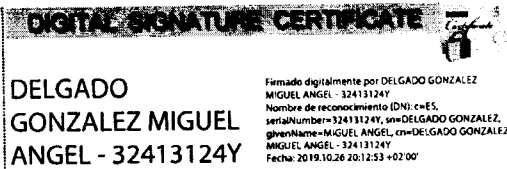
A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBAADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A





**Pladesemapesga**  
Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L.: C 47-2015

**Secretaria de Medios Presidencia Xunta de Galicia**

**Presidencia - Secretaría Xeral de Medios**

**Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra**

Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela

**TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281 FAX: 981-541277 E-MAIL: [info.cata@xunta.es](mailto:info.cata@xunta.es)**

**En su faceta de Secretaria de Medios - y responsable de la totalidad de los servicios de información y comunicación de la Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre Retegal.+, AMTEGA..+, Secretaría de Medios Xunta..+, EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN..+, CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+, Porto de A Coruña...+, Fundación Camilo José Cela..+, y responsable de la imagen de las webs [www.ppdegalicia.com](http://www.ppdegalicia.com) y [www.feijoo.gal](http://www.feijoo.gal) y del PP de Galicia..+ .**

**Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expone.**

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documentol y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

**SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.**

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose **¡ es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carcter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las

resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..

Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PUBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arrojando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en piveza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación.....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online - correo ... <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;



Asociación de PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa, NIF: G-70321807 - Registro 2017/016409 formada por 62.800 socios y formada por personas físicas, empresarias, políticas, profesionales y artísticas, normativas, medioambientales, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que representan el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Su presencia en Internet queda reflejada en [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) y [info@pladesemapesga.com](mailto:info@pladesemapesga.com)

**Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia**

<https://rgi.cnmec.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

**La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

**AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el**

**Número Registro: 539622127908-83**

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>

**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172338	26-10-2019 20:27	Secretaría Xeral da Presidencia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitud (Anexo I)	Solicitud-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DDBAADEE2B9BC80495B86B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39F33361DB914A0ACE1B39A





## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172335	26-10-2019 20:20	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	52F08C01E3CE345D5689B8ED1F5112D7E8196CCBE697 1EE4F0A5BBC2A2A4B62F
Documento acreditativo da representación	peticion-alfonsoruada.pdf	3E0EF8F0B933E5D2834178FE34BAA54A4C2E895AE036 7B4E87B38CC71ED6A616





## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública, presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172337	26-10-2019 20:24	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	8D20C48EAABF7C5319A840DEF11F506D63902FD67055 8A469B157AFF94FF0288
Documento acreditativo da representación	peticion-asesoriajuridica-xunta.pdf	09DC4A9D5A0EA0646EB45501B72C1FB689BA4D99A5D 131C3B9E6DA747183F37E







## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras nº 1 – 15006  
(Edificio Real Fábrica de Tabacos – Plaza de la Palloza)  
Telf: 881 881 678 / Fax: 881 881 679  
jepecoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

**Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. – 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **“Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.-** Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en “La Opinión de A Coruña” el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente acuerdo:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participan o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el período electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente período electoral.

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: “Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000” y “EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos”, por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el período electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: “TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI”, y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade “La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinversión del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA”, parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomente públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este período de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante."

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Vallalpando Lucas



**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

**Id Cendoj: 15030330022018100439**

**Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

**Sede: Coruña (A)**

**Sección: 2**

**Fecha: 25/10/2018**

**Nº de Recurso: 4166/2018**

**Nº de Resolución: 507/2018**

**Procedimiento: Contencioso**

**Ponente: MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

**Tipo de Resolución: Sentencia**

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

**EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por haber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencia del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para





decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se constriñe a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibile que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada ( sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado ( sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.



La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

*b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*

*c) A la libertad de cátedra.*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.



Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que *"...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que "la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejercita tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.



### TERCERO.- Costas procesales.

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

### FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

- 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.
- 2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
- 3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".
- 4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
- 5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente D<sup>a</sup> **MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ** al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2568927	29-12-2019 13:54	SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude	Solicitude-PR004A-20191229.pdf	46CCC821EDB51B46793463EA72E1BEA0D63DBE7099 2E4E9759E1512BE4F1C37
Outros documentos acreditativos ou relativos a situacións	solicitud-TransparenciaGalicia.pdf	5A692B3A4672720A0AD6271423A472ED81B3B4323F23 C1000530541233DB796A



**Asunto:** Asunto informacion exp- RSCTG1-2020 e RSCTG 2-2020

**De:** "Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>

**Fecha:** 09/01/2020 13:15

**Para:** <reclamacions@comisiondatransparencia.gal>

Estimados Responsables de los expedientes RSCTG1-2020 e RSCTG 2-2020 notificados a día de hoy por correo postal.

Una vez informados del contenido de los mismos debemos aclarar que por posible confusión, los dos corresponden al mismo asunto.

Siendo el principal el nombrado como RSCTG 1/2020 siendo el 2 meramente un anexo a modo ilustrativo que expone para su justificación de la solicitud principal otro expediente resolutivo favorable a esta parte de esa Comisión.

Esperando sepan disculpar la confusión y solicitándole disculpas.

Atte. Miguel delgado Pte Pladesemapesga DNI 32413124 Y ( Se ruega acuse de recibo )

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 10/01/2020 8:30:13

**ENTRADA 184/20**

Nº DE EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

Mod. 35 PLUS - 2E

**Aviso de Recibo  
NOTIFICACIÓN**

DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CLIENTE EN MAYÚSCULAS  
DESTINATARIO DO ENVÍO: CUBRIR POLO CLIENTE EN MAIÚSCULAS

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...  
C.P. e Municipio...

Provincia...

**Notificación Administrativa**

NV6BWQ0200003400115005E

**Devolver a**

**AR**

VALEDOR DO POBO  
Calle HORREO 65  
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA

1120

Acto Notificador: REF0801202011350997.0 Expediente: RSCTG-2/20 RS162/20

PLADESEMAPESGA  
MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ  
RUA JUAN CASTRO MOSQUERA 28 2D  
15005 A CORUÑA  
A CORUÑA ESPAÑA



C.P. e Municipio...

Provincia...

ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN: NON PASAR POR DEBAIXO DESTE LÍMITE

# RECEPCIÓN

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente: /  
O/A que suscribe declara que o envío indicado foi debidamente:

☒ Entregado

☐ Rehusado / Rexeitado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR  
NOME E APELIDOS DO RECEPTOR

Miguel A Delgado Pineda

DNI DEL RECEPTOR / DNI DO RECEPTOR

37413124Y

ETIQUETA DE CERTIFICADO

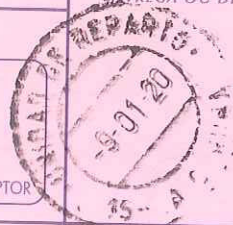
FECHA / DATA

9-1-2020

FIRMA DEL RECEPTOR / SINATURA DO RECEPTOR

# NOTIFICACIÓN

SELLO DE LA OFICINA DE  
ENTREGA O DEVOLUCIÓN /  
SELO DA OFICINA DE  
ENTREGA OU DEVOLUCIÓN



1<sup>er</sup> INTENTO

ENTREGA DOMICILIARIA  
ENTREGA A DOMICILIO

INTENTO 2<sup>o</sup>

NIP Y FIRMA EMPLEADO\*  
NIP E SINATURA EMPREGADO\*  
201416

*[Signature]*

FECHA Y HORA / DATA E HORA

9-1-2020

1115

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Entregado a Domicilio	
<input type="checkbox"/>	2. Dirección Incorrecta Enderezo Incorrecto	
<input type="checkbox"/>	3. Ausente Reparto	
	Se dejó aviso llegada en buzón Deixouse aviso chegada na caixa de correo	
<input type="checkbox"/>	4. Desconocido/a Descoñecido/a	
<input type="checkbox"/>	5. Fallecido/a Falecido/a	
<input type="checkbox"/>	6. Rehusado Rexeitado	
<input type="checkbox"/>	7. No se hace cargo Non se fai cargo	

NIP Y FIRMA EMPLEADO\*  
NIP E SINATURA EMPREGADO\*

*[Signature]*

FECHA Y HORA / DATA E HORA

OFICINA

NIP Y FIRMA EMPLEADO\*  
NIP E SINATURA EMPREGADO\*

*[Signature]*

<input type="checkbox"/>	8. Entregado
<input type="checkbox"/>	9. No retirado Non retirado

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega / Empregado/a que realiza e dá fe do resultado da entrega.

ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN: NON PASAR POR DEBAIXO DESTE LÍMITE

15120081837





## Documento xustificante do sistema Notifica.gal

<b>Operación realizada</b>	
Operación	Posta a disposición
Data operación	16/01/2020 14:32:36
<b>Destinatario da notificación</b>	
Identificador Notifica.gal	111787
Nome/Razón social	VALEDOR DO POBO
Apelidos	
NIF	S6500009C
<b>Entidade emisora</b>	
Identificador Notifica.gal	1801
Nome	Secretaria Xeral de Medios
<b>Procedemento notificado</b>	
Identificador Notifica.gal	10772
Nome	PR004A Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contén cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.
<b>Información sobre a notificación</b>	
Identificador Notifica.gal	1239451
Identificador remesa	461138
Número expediente	RSCTG 1/2020 (TR_12/2019)
Asunto	Petición de informe
Adxuntos (un hash por liña)	91f81a91382587603ee0d32cbebecc414403f340
Data posta disposición	16/01/2020 14:32:36
Data rexistro de saída	16/01/2020 14:32:36
Número rexistro de saída	S 26686 / RX 49859





**XUNTA DE GALICIA**  
PRESIDENCIA  
Secretaría Xeral de Medios

Edificio administrativo de San Caetano, s/n  
15781 Santiago de Compostela  
Telf.: 981 545922  
www.xunta.gal



Ref: TR\_12/2019

Expte: **RSCTG 1/2020**

ASUNTO: Petición de informe

En data 14/01/2020 tivo entrada na Secretaría Xeral de Medios unha solicitude de informe remitida pola Comisión da Transparencia de Galicia, en relación coa reclamación interposta por Miguel Ángel Delgado González contra a desestimación por silencio administrativo da súa solicitude de acceso á información pública referente á identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

Comunicolles que se reenvía a dita petición de informe á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, en tanto que tamén se lle remitiu a este órgano a solicitude de información pública inicial por ser este o que tivo unha participación activa no procedemento ante a Xunta Electoral Provincial da Coruña e polo tanto, o que dispón da información.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2020

O subdirector xeral de Réxime Xurídico

Enrique González Murga

Cargo: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico  
Data e hora: 16/01/2020 13:19:09

**Á COMISIÓN DA TRANSPARENCIA**



**Xacobeo 2021**

Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



Nº DE EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

Mod. 35 PLUS - 2E

DESTINATARIO DEL ENVÍO: RELLENAR POR EL CUENTE EN MAYÚSCULAS  
DESTINATARIO DO ENVÍO: CUBRIR POLO CUENTE EN MAIÚSCULAS

Aviso de Recibo  
NOTIFICACIÓN

D/Dª...

Domicilio...

C.P. y Población...  
C.P. e Municipio...

Provincia...

IL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL ■ CODIFÁCIL

Notificación Administrativa

NV8BWQ02CC003390115781H

AR Devolver a

VALEDOR DO POBO  
Calle HORREO 65  
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA

Acto Notificador: REF0001202011350997 0 Expediente: RSC1G 1/20 RS151/30

SECRETARIA XERAL DE MEDIOS  
EDIF ADMTVO SAN CAETANO  
15781 SANTIAGO  
A CORUÑA ESPAÑA

CULAS  
IS

CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE • CORREOS ON LINE •

ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN: NON PASAR POR DEBAIXO DESTE LÍMITE



**RECEPCIÓN**

El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido debidamente: /  
 O/A que suscribe declara que el envío indicado foi debidamente:

☒ Entregado ☐ Rehusado / Rexeitado

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECEPTOR  
 NOME E APELIDOS DO RECEPTOR

**SONIA BALADO SEGARRA**

DNI DEL RECEPTOR / DNI DO RECEPTOR

ETIQUETA DE CERTIFICADO

FECHA / DATA

14/01/2020  
**SONIA BALADO SEGARRA**  
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GALICIA

FIRMA DEL RECEPTOR / SINATURA DO RECEPTOR

**NOTIFICACIÓN**

SELLO DE LA OFICINA DE  
 ENTREGA O DEVOLUCIÓN /  
 SELO DA OFICINA DE  
 ENTREGA OU DEVOLUCIÓN



**1er INTENTO**

**ENTREGA DOMICILIARIA  
 ENTREGA A DOMICILIO**

NIP Y FIRMA EMPLEADO\*  
 NIP E SINATURA EMPREGADO\*  
**348374**

1. Entregado a Domicilio	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Dirección Incorrecta Enderezo Incorrecto	<input type="checkbox"/>
3. Ausente Reparto	<input type="checkbox"/>
Se dejó aviso llegada en buzón Deixouse aviso chegada na caixa de correo	
4. Desconocido/a Descoñecido/a	<input type="checkbox"/>
5. Fallecido/a Falecido/a	<input type="checkbox"/>
6. Rehusado Rexeitado	<input type="checkbox"/>
7. No se hace cargo Non se fai cargo	<input type="checkbox"/>

**14/01/2020**

FECHA Y HORA / DATA E HORA

**09:00**

**09:00**

\* Empleado/a que realiza y da fe del resultado de la entrega / Empregado/a que realiza e dá fe do resultado da entrega.

ATENCIÓN: NO SOBREPASAR POR ABAJO ESTE LÍMITE • ATENCIÓN: NON PASAR POR DEBAIXO DESTA LÍMITE

**OFICINA**

NIP Y FIRMA EMPLEADO\*  
 NIP E SINATURA EMPREGADO\*

8. Entregado	<input type="checkbox"/>
9. No retirado Non retirado	<input type="checkbox"/>

915CDT16C/1131D69721A



**XUNTA DE GALICIA**  
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA  
Asesoría Xurídica Xeral

Edificio administrativo de San Caetano, s/n  
15781 Santiago de Compostela  
A Coruña  
Tfno.: 981 545 898 Fax: 981 545 896  
asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal

**REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO**  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data: 03/02/2020 12:54:11

**ENTRADA 811/20**

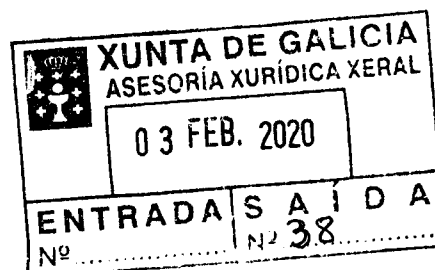
Achégase o Informe elaborado por este centro directivo sobre a reclamación presentada por D. Miguel Ángel Delgado González en representación da Plataforma de Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia contra desestimación por silencio administrativo da solicitude de acceso a información referente á identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña (Expediente de la Comisión de Transparencia RSTCTG 1/2020)

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2020

O director xeral da Asesoría Xurídica Xeral



Manuel Pillado Quintáns



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA



Xacobeo 2021



**INFORME SOBRE A RECLAMACIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ANGEL DELGADO GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DA PLATAFORMA DE DEFENSA DEL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO DE GALICIA CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DA SOLICITUDE DE ACCESO A INFORMACIÓN REFERENTE Á IDENTIFICACIÓN DE LETRADOS DA XUNTA DE GALICIA EN DETERMINADOS EXPEDIENTES DA XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DA CORUÑA (Expediente de la Comisión de Transparencia RSCTG 1/2020)**

Con data de 16 de xaneiro de 2020, a Subdirección Xeral de Réxime Xurídico da Secretaría Xeral de Medios, remite a esta asesoría xurídica petición de informe da Comisión de Transparencia de Galicia que tivo entrada na Secretaría Xeral de Medios o 14/01/2020, en relación coa reclamación interposta por Miguel Ángel Delgado González contra a desestimación por silencio administrativo da súa solicitude de acceso á información pública referente á identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

Na petición da Comisión de Transparencia indícase que se informe a esa institución e se achegue o expediente para o seu estudo por parte da Comisión de Transparencia de Galicia. Así mesmo, solicítase que o informe se centre na existencia da solicitude, os trámites realizados, as alegacións do interesado e a información pública obxecto da solicitude tal e como contempla a Lei 1/2016.

De acordo co solicitado, esta asesoría xurídica emite o seguinte informe:

**ANTECEDENTES**

I. Con data de 26 de outubro de 2019, D. Miguel Ángel Delgado González, manifestando actuar en representación da Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), presenta diversas solicitudes de información pública co mesmo contido dirixidas á Secretaría Xeral de Medios; Vicepresidencia-Asesoría Xurídica Xeral; e Dirección Xeral de Xustiza.

Acompáñase copia dos escritos presentados.

No “asunto e síntesis da petición” o interesado fai constar *“solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos, identificando a su autor como se expodrá”*.



Como motivación da súa solicitude o interesado fai constar:

*"Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:*

*Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.*

*Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.*

*El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirala de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose ¿ es que los letrados públicos no conocen la Ley !."*

*"La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carácter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio." (...)*

*"El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.*

*A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de*



*comunciación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo (...)"*

*"La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal. (...)"*

*"Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arrojando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en píeza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra."*

II. Con data 29 de decembro de 2019, D. Miguel Ángel Delgado González, en representación de PLADESEMAPESGA, presenta ante a Secretaría Xeral de Presidencia solicitude electrónica "para remitir a la Comisión de Transparencia de Galicia", na que fai constar no "ASUNTO; Solicitud de expediente contra la Secretaria de Medios de la Xunta por silencio administrativo de información pública relacionada, con la solicitud Xustificante-PR100A-20191026".





A solicitude expresa: *"PRIMERO.· El 26 del 10 de 2019 solicitábamos la identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.· , 152/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor. Que transcurrido ampliamente los plazos solo tenemos conocimiento del silencio administrativo incumpliendo la Ley de Transparencia". O cidadán solicita "que tenga por presentado este escrito, o acepte y se sirva ordenar lo que corresponda y si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada decisión".*

## **CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS**

### **I. Competencia para a emisión deste informe**

A comunicación da Comisión Galega da Transparencia solicitando a emisión deste informe foi realizada á Secretaría Xeral de Medios, dado que formalmente a reclamación se dirixe contra a falta de resposta desta.

Porén, tendo en conta que a competencia sobre a materia á que se refire a reclamación corresponde a esta asesoría xurídica, a Subdirección Xeral de Réxime Xurídico da Secretaría Xeral de Medios remitiunos a petición de informe, polo que emitimos o presente informe dirixido á Comisión.

### **II. Reclamación contra a desestimación presunta da solicitude de información pública**

O interesado presenta reclamación contra a desestimación presunta da súa solicitude de información, dado que alega que transcorreu o prazo dun mes para resolvela. Porén, debe terse en conta as alegacións que seguen, en relación coa natureza da solicitude presentada e o seu obxecto, constituído por cuestións que non forman parte do dereito de acceso á información pública, aspectos polos que entendemos debe ser inadmitida a reclamación. Así mesmo, debe facerse referencia á inadmisibilidade da solicitude inicial por ter carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei.

**III. Inadmisibilidade da reclamación de acordo co artigo 116.c) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, por non tratarse o escrito presentado dunha solicitude de información pública senón dunha denuncia.**



De conformidade co recollido no apartado de antecedentes, dado o contido do escrito presentado, pese a que se tivese cualificado polo recorrente como de solicitude de información pública, o seu contido real responde ao dunha denuncia, dado que o seu obxecto consiste en poñer en coñecemento da administración unha serie de feitos que estima constitutivos dunha conduta incorrecta ou desviada e alude incluso a que existen “claros datos” de delito.

En particular, aínda que o escrito parece que comeza formulando unha solicitude de información pública, realmente engade no que cualifica como “motivación” os feitos que denuncia. Tendo en conta o contido do escrito, entendemos que prevalece a natureza de denuncia, dado que, este aspecto é inescindible da información que se solicita, de tal maneira que a solicitude de información é meramente instrumental da denuncia que se formula.

Así, o propio escrito recolle, como citamos no apartado de antecedentes: *“Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG”*.

En efecto, a tese que se sostén no escrito presentado consiste en expresar que *“el PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña (...)”*.

**No caso que nos ocupa, tendo en conta a tese que se mantén na solicitude presentada, consistente basicamente na afirmación da comisión dunha serie de feitos que o solicitante considera, ademais de “indecentes” e “inmorais”, delictivos, (“tapar” “asuntos ilegais”, “con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS”, polos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería “abrir diligencias” contra las autoridades y contra los letrados persoados), resulta evidente que a contestación da administración esixe defender en dereito a súa actuación e excede da contestación a unha mera solicitude de información.**

Cabe recordar que como expresa a Resolución desa Comisión da Transparencia de Galicia no Expediente RSCTG 017/2018, na que se inadmite a reclamación:

*“No presente caso, a solicitude inicial presentouse nun modelo de acceso á información pública (modelo PR100 A da Xunta de Galicia), pero en realidade non se trata dunha petición de acceso á información pública, senón dunha solicitude de actuación dirixida á Consellería do Mar para*



*que interveña nunha determinada Confraría de Pescadores; por tanto, non habendo solicitude de acceso á información pública, non procede a admisión do recurso en materia de acceso á información pública, dado que este está reservado, de conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 1/2016, para a impugnación en materia de acceso á información pública.”*

Así mesmo, na Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia no expediente RSCTG 072/2018, se indica:

*“Non existe por tanto unha solicitude de información pública no senso definido no artigo 24 da Lei 1/2016, senón unha solicitude de apertura dun expediente sancionador ou expediente disciplinario, polo que ao non ser o obxecto da reclamación a obtención dunha información pública, non procede a admisión da reclamación presentada, por non ser esta Comisión competente, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 19/2013.”*

Na Resolución do expediente RSCTG 025/2019, faise constar:

*“O interesado presenta unha reclamación en materia de acceso á información pública, por non ter resposta a unha denuncia presentada ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Non existe no presente caso unha solicitude de acceso á información pública non atendida fronte ao que o interesado reclame, senón a presentación dunha denuncia que pode iniciar un procedemento e no que o reclamante é denunciante, que se rexerá pola normativa en materia sancionadora.*

*De acordo co anterior, ao non ter por obxecto a reclamación presentada polo Sr. .... impugnar a falta de contestación a unha solicitude de acceso á información, senón a falta de contestación a unha denuncia, de conformidade co disposto no artigo 116.c da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, procede a inadmisión da reclamación presentada, por non tratarse dun acto susceptible de recurso en materia de acceso á información pública.”*

Entendemos que a doutrina citada pode aplicarse no caso que nos ocupa e considerar a reclamación inadmisíbel de acordo co disposto polo artigo 116.c da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, por presentar a solicitude inicial a natureza de denuncia, e non ser, por tanto, a súa falta de resposta un acto susceptible de reclamación en materia de acceso á información pública.



**IV. Inadmisibilidade da reclamación de acordo co artigo 116.c) da Lei 39/2015, por ter por obxecto a solicitude cuestións que non forman parte do dereito de acceso á información pública**

Cabe comezar indicando que, se non fose polas circunstancias concorrentes neste caso, que revelan unha utilización desviada e abusiva da lexislación de transparencia para conseguir outras finalidades - como veremos no seguinte apartado ao estudar o carácter abusivo da solicitude- a información concreta que solicita o reclamante resulta meramente trivial e non tería esta asesoría xurídica ningún problema en facilitarlla, se ben, como veremos, entendemos que non está cuberta pola lexislación de transparencia.

En efecto, a solicitude do agora reclamante refírese a dous extremos:

- Que se identifique aos letrados da Xunta de Galicia persoados nos expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019 da Xunta Electoral Provincial de A Coruña.
- Copia da orde de persoación nos procedementos, “identificando a su autor como se expondrá”.

Unha petición deste tipo, illadamente considerada, se non explicitase o escrito a motivación que contén, e sen integrala nas teses conspiratorias do reclamante, é inocua, pois podería ser respondida meramente indicando:

- Non houbo unha persoación formal da asesoría da Xunta nos procedementos indicados, nin esta é necesaria. Simplemente, como é o habitual, se efectuaron as alegacións para as que foi emprazada pola propia Xunta Electoral.
- Non existiu unha específica orde de persoación nestes procedementos dado que non resulta necesaria legalmente. A Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, non esixe a existencia dunha específica orde de persoarse nun procedemento para facer alegacións cando se cita á administración autonómica.
- As alegacións foron asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como tamén é practica habitual nestes casos.



Agora ben, o feito de que podería contestarse deste modo a efectos aclaratorios ao solicitante non debe ocultar a conclusión de que a información solicitada non ten acomodo realmente no concepto de información pública que recolle a lexislación de transparencia.

A Lei 1/2016 establece no seu artigo 24, *“O dereito de acceso á información pública”*:

*“1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la normativa básica en materia de transparencia.*

*Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones.”*

Pois ben, debe advertirse que o solicitante pide un documento que non existe, como é a orde de persoación que el presume ditada. O dereito a acceder a documentos inexistentes non forma parte, evidentemente, do contido do dereito á información pública, como teñen aclarado diversas resolucións do Consello de Transparencia e da Comisión Galega da Transparencia. Polo tanto, esta petición debe ser inadmitida.

Neste sentido, a Resolución desa Comisión da Transparencia de Galicia no Expediente RSCTG 017/2018, na que se inadmite a reclamación, expresa: *“A Lei non recoñece, como é obvio, o dereito a solicitar información ou documentos que non existen, e no presente caso non existe, porque nin a normativa reguladora do suxeito incluído dentro do ámbito de aplicación da Lei, nin a actividade concreta sobre a que se pide, non o esixe”*.

É mais, dado que no seu escrito indica que quere a copia da orde de persoación nos procedementos, *“identificando a su autor como se expondrá”* e no escrito mantén a tese de que a Secretaria Xeral de Medios foi citada persoalmente, ordenou á asesoría xurídica persoarse, desprestixiar ao denunciante e opoñerse ao interese xeral, cabe concluír que o reclamante o que pretende realmente é que se confirme o que xa presume.

Isto é, o reclamante pretende que se lle confirme a súa tese, ou, no seu caso, que se conteste ou contradiga, aspectos que obviamente desbordan o dereito á información pública.

De feito, unha contestación completa ao reclamante non podería sen mais descoñecer o que afirma e debería, polo tanto, estenderse en explicacións legais e fácticas que amosasen o carácter erróneo da súa tese e que, polo tanto, entraría nun debate xurídico con el (que parece



que é o que realmente pretende) e desbordaría o ámbito propio do dereito á información pública.

En definitiva, tanto a petición do reclamante como o contido da súa contestación desborda o dereito á información pública.

O outro aspecto da solicitude, “que se identifique aos letrados de la Xunta de Galicia persoados”, tampouco solicita un “contido” ou “documento” que sexa obxecto do dereito á información pública.

Así, non solicita copia dos escritos de alegacións presentados (que están asinados, o que permite coñecer o seu autor), cuestión que nin se entendería, dado que como parte no procedemento ante a Xunta Electoral podería solicitalos e obtelos ante esta, alegando o artigo 53.1.a) da Lei 39/2015 (dereito a acceder e a obter copia dos documentos contidos nos procedementos, aplicable supletoriamente como se deduce do artigo 120 da LOREG), sen necesidade de acudir a unha solicitude de información pública ante esta administración e a unha reclamación ante a Comisión de Transparencia.

Debe recordarse, neste sentido que a disposición adicional primeira da Lei 19/2013 expresa:

*“1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.”*

Polo tanto, o acceso por parte dun interesado a un documento de alegacións que figura nun procedemento non se rexe pola lexislación de transparencia.

Ademais, a identificación das autoridades ou persoal que participan nos procedementos non é “información pública”, “documentos” ou “contidos”, senón un dereito distinto que se regula no artigo 53.1.b) da Lei 39/2015, e referido soamente aos interesados nun procedemento.

En definitiva, entendemos tamén que concorre a causa de inadmisión da reclamación de que a información solicitada non existe ou non é constitutiva de “información pública” no sentido técnico da normativa en materia de transparencia.

En particular, como expresa a Resolución desa Comisión da Transparencia no expediente RSCTG 0064/2016:



*“O interesado realiza unha consulta en relación á administración autonómica acerca do cumprimento dos principios de idoneidade e proporcionalidade en relación a unhas cámaras de vídeo vixilancia. Esta consulta, polo seu propio contido, non entra dentro do concepto de información pública definido na lei 1/2016, do 18 de xaneiro como “os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións”.*

*En efecto, o interesado está a solicitar unha valoración xurídica sobre a adecuación dunha decisión administrativa aos principios xerais do ordenamento xurídico. Esa valoración é unha consulta de aclaración que pode entenderse como información de carácter puramente administrativo o de funcionamento, non estando dentro da definición legal do que debe considerarse como información pública. Isto non significa que a consulta non teña que ser respondida, senón que a Comisión da Transparencia non é competente para entra no fondo do asunto, ao non estar amparada a solicitude na lexislación de transparencia non sendo pois susceptible de utilizar os medios de impugnación previstos en dita normativa.”*

Deste modo, entendemos que, no caso que nos ocupa, a contestación ao solicitante, dado o contido da solicitude, involucra unha valoración xurídica sobre os feitos que alega, implica unha aclaración referida a información de carácter puramente administrativo o de funcionamento, e esixe defender en dereito a actuación da administración, non estando dentro da definición legal do que debe considerarse como información pública.

#### **V. Desestimación da reclamación por ter a solicitude inicial presentada carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei**

De entenderse que a natureza do escrito presentado inicialmente polo reclamante responde realmente a unha solicitude de información que deba rexerse na súa tramitación pola lexislación de transparencia, entendemos que a reclamación debe ser desestimada porque a solicitude incorre na causa de inadmisión do artigo 18.1.e) da Lei 19/2013, que establece:

*“Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:*

*e) Que (...) tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.”*

Como se deduce da doutrina do Consello de Transparencia e Bo Goberno, o carácter abusivo dunha solicitude de acceso á información debe ser analizada tendo en conta a existencia



dunha finalidade contraria á perseguida pola Lei, para o que deben analizarse as circunstancias de cada caso concreto.

O Criterio Interpretativo 3/2016, do 14 de xullo, do indicado Consello, respecto do carácter abusivo da petición de información, indica:

*"El artículo 18.1.e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición "no esté justificada con la finalidad de la Ley".*

*De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión:*

*A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y*

*B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley.*

*1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación:*

*— Con carácter general, en aquéllos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: "Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho".*

*— Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos*

*— Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros.*

*— Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe.*

*2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de:*





— *Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos*

— *Conocer cómo se toman las decisiones públicas*

— *Conocer cómo se manejan los fondos públicos*

— *Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas*

*Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando:*

— *No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.*

— *Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG.*

— *Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa.”*

Pois ben, no caso que nos ocupa deben terse en conta as seguintes circunstancias:

- Como xa vimos, pese a presentarse formalmente como unha solicitude de acceso á información pública, non pode ignorarse o contido do escrito presentado, no que tras expresar que *“Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG”* e que *“el PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña (...)”*, o escrito continúa reprochando aos letrados públicos prestarse a *“ese xogo”* e acusándoos de non coñecer a Lei e de defender a Mar Sánchez Sierra nun *“asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG”*.

O interesado chega a atribuír á Mar Sánchez Sierra o ditado dunha orde a asesoría xurídica *“para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el “ARCHIVO” del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal. (...)”*.



A continuación se acusa ao presidente da Xunta de Galicia, ao vicepresidente e ao xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, de “arropar” e “encubrir” o “uso partidista de los recursos públicos para “hacer feliz ” a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía”, “para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS”.

Polo tanto, faise unha imputación de feitos delitivos cunha tipificación concreta que, a xuízo do denunciante, deberían xustificar a apertura de dilixencias penais non só fronte as autoridades citadas, senón contra os letrados persoados nos expedientes da Xunta Electoral.

- Entendemos que o contido difamatorio e insultante do escrito resulta elemento de xuízo suficiente para percibir na intención do seu autor un abuso de dereito recollido no artigo 7.2 do Código Civil, tendo en conta que sobrepasa manifestamente os límites normais do exercicio dunha petición de transparencia, pois, lonxe de limitarse á solicitude concreta de información, o escrito fai suposto da cuestión e atribúe conspiracións delitivas a todo un conxunto de autoridades públicas, que entende que participaron nos feitos, identificando os delitos concretos supostamente cometidos.
- De acordo co indicado, non pode considerarse que a solicitude formulada estea xustificada na finalidade da Lei dado que, lonxe de pretender someter a escrutinio a acción dos responsables públicos ou coñecer como se toman as decisións públicas, o seu obxecto real é formular unha tese delictiva conspiratoria e atribuír actuacións que presume a determinados cargos. Dito doutro modo, en lugar de pretender realmente a obtención de información, o denunciante xa conclúe que determinados feitos existiron e os atribúe ás autoridades que identifica ou, en xeral, aos letrados que actuaron nos procedementos da Xunta Electoral.
- Isto é, o denunciante non pretende coñecer como se toman as decisións públicas ou os seus criterios, senón expoñer como, ao seu entender, se adoptaron unhas decisións que afirma delictivas.
- Polo tanto, entendemos que concorren as circunstancias antes expresadas que se expoñen no criterio interpretativo do Consello de Transparencia, dado que, nunha ponderación razoada, a petición non pode ser reconducida a ningunha das finalidades sinaladas na normativa de transparencia.
- En particular, como xa expresamos, dificilmente a información solicitada pode considerarse como información pública, de acordo coa definición do artigo 13 da Lei 19/2013 e, ademais,



pode ter por obxecto ou consecuencia a comisión dun ilícito civil o penal, dado o contido insultante e difamatorio do escrito.

- Debe notarse ademais que a existencia non dun interese xeral obxectivo na divulgación da información solicitada senón dun interese persoal e subxectivo vén demostrada polo feito de que, como indica o solicitante, ten un proceso penal pendente no que a querelante é Mar Sánchez Sierra (Secretaría Xeral de Medios), querela interposta precisamente por calumnias.

Neste sentido, como indica por exemplo, a Resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno 78/2018, do 30 de abril (Aranzadi JUR\2018\218027):

*"(...) Las solicitudes planteadas deben analizarse desde la perspectiva del control de la acción de la Administración y la rendición de cuentas por las decisiones públicas, toda vez que, en no pocas ocasiones como ha quedado destacado en los antecedentes de hecho y atendiendo al tipo de información requerida, ciertamente podría cuestionarse su utilidad para garantizar el interés común en conocer la actuación pública, poder participar en la misma y exigir responsabilidades por las decisiones de los organismos públicos; todos ellos, pilares fundamentales y ratio iuris de la LTAIBG. Así, debe recordarse que es la protección del interés general en la transparencia pública, como bien común de nuestra sociedad, la que debe prevalecer frente a solicitudes de información que persiguen otros intereses, de carácter privado o profesional, que no encajan en la finalidad perseguida por la LTAIBG y, por tanto, no pueden ser considerados superiores."*

- Outro indicio do carácter abusivo da petición de información e o seu fundamento nunha finalidade distinta das previstas na lei é a forma de presentación da petición, dado que se presentaron varias solicitudes de acceso co mesmo contido, dirixidas a distintos órganos, como indicamos nos antecedentes. Isto fai ver que o que pretende o denunciante é a difusión das súas teses, ou incluso dificultar o funcionamento dos servizos ou intentar provocar unha resposta descoordinada da administración, máis que buscar de modo eficiente ou útil unha concreta resposta.

- Os datos anteriores deben ser postos en relación coa tese manifestamente irracional que sostén o denunciante sobre os feitos que dan orixe a esta reclamación. En efecto, só cunha evidente mala fe pode entenderse que os letrados da administración están defendendo a actuación persoal ou privada da Secretaría Xeral de Medios. O agora reclamante presentou unhas denuncias ante a Xunta Electoral Provincial da Coruña. O obxecto eran unhas campañas institucionais de comunicación contratadas pola administración autonómica, como non pode descoñecer o reclamante. A Xunta Electoral emprazou para contestar á administración autonómica. A asesoría xurídica da Xunta de Galicia contestou defendendo en dereito a



actuación da administración autonómica. Basta ler o texto da resolución da Xunta Electoral que achega o propio reclamante para comprobar que en ningún caso aprecia esta a existencia dunha conduta constitutiva de infracción electoral nin ordena a apertura dun procedemento sancionador, desestimando as peticións do reclamante neste sentido.

Só con mala fe pode o reclamante manter que o citado pola Xunta electoral foi o PPdeG ou que se trata dun asunto privado de Mar Sánchez Sierra e que entón recorreron aos letrados da Comunidade Autónoma para persoarse no procedemento, dando a orde Mar Sánchez Sierra de que se desprestixiara ao denunciante.

En particular, pode recordarse simplemente que o artigo 1 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, entende por asistencia xurídica, que se presta pola asesoría xurídica da Xunta, o asesoramento en dereito e a representación e defensa en todo tipo de procesos xudiciais e ante órganos administrativos, polo que defender un acto da administración ante unha xunta electoral forma parte da asistencia prevista legalmente.

A Lei citada non esixe tampouco a existencia dunha específica orde de persoarse nun procedemento para facer alegacións cando se cita á administración autonómica, e de feito non existiu esa orde neste caso.

- Así mesmo, debe terse en conta a actitude coetánea no tempo do reclamante, que amosa que as súas finalidades son outras ben distintas da transparencia, finalidades nas que a presente reclamación se integra como unha peza máis:

Así, publicación no medio dixital Xornal de Galicia (instrumento utilizado xunto con PLADESEMAESGA polo reclamante) do 10 de outubro de 2019:

“Pladesemapesga presenta denuncia ante la Fiscalía de Galicia y la Junta Electoral de Galicia contra Mar Sánchez Sierra por presuntos delitos electorales y prevaricación administrativa.”

<https://xornalgalicia.com/12743-pladesemapesga-presenta-denuncia-ante-la-fiscalia-de-galicia-y-la-junta-electoral-de-galicia-contramar-sanchez-sierra-por-presuntos-delitos-electorales-y-prevaricacion-administrativa>

Nesta publicación figura copia dunha denuncia presentada en fiscalía por D. Miguel Ángel.

No mesmo sentido:



<https://www.xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/12699-pladesemapesga-presenta-denuncia-ante-la-junta-electoral-de-galicia-y-la-fiscalia-europea-ol-f-por-el-uso-de-fondos-publicos-y-europeos-para-publicitar-logros-electorales-del-gobierno-del-ppdeg>

[https://lavozperiodistica.blogspot.com/2019/10/la-secretaria-de-medios-de-la-xunta-de.html?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed:+LaVozPortada+\(LA+VOZ+PORTADA\)&m=1](https://lavozperiodistica.blogspot.com/2019/10/la-secretaria-de-medios-de-la-xunta-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+LaVozPortada+(LA+VOZ+PORTADA)&m=1)

(neste artigo, o buzón de correo que figura para que os interesados cubran un “modelo proforma de denuncia” es [info@pladesemapesga.com](mailto:info@pladesemapesga.com))

- En particular, referido á propia Comisión da Transparencia, mostra da confusión interesada que pretende crear o reclamante, cabe destacar esta publicación, que remite a outras moitas do propio D. Miguel Ángel:

<https://xornalgalicia.com/galicia/13664-la-comision-de-transparencia-abre-expediente-para-identificar-a-letrados-publicos-contratados-por-mar-sanchez-sierra-en-presuntos-delitos-electorales-del-ppdeg>

Nesta publicación, de 9 de xaneiro deste ano, pode lerse, baixo o enganoso título “La Comisión de Transparencia abre expediente para identificar a letrados públicos contratados por Mar Sánchez Sierra en presuntos delitos electorales del PPdeG”:

*“Con fecha 8 de Enero de 2020 la Comisión de Transparencia de Galicia comunica a la entidad Pladesemapesga el inicio de expediente RSCTG 1/2020 por la negativa de María del Mar Sánchez Sierra a identificar a letrados por ella enviados a un expediente de la Junta Electoral por la que ha sido condenada a retirar publicidad prohibida afin al PPdeG pero financiado todo ello con fondos públicos que no le pertenecen ni a Mar Sánchez Sierra ni al Sr Feijóo. (...)”*

Este artigo, onde o reclamante se cita a si mesmo, ademais de repetir as teses conspiratorias formuladas na reclamación, continúa expresando:

*“La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando “Fondos estructurales europeos” y Fondos Públicos de las campañas “Galicia Calidade” “Xacobeo 21” y “Xunta de Galicia” para financiar esas campañas de tipo político.*

*Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia*



*<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/>  
peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y*

*apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>*

*La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al inetrés general de la ciudadanía que es a quien rep`resentan o deberían representar por imperativo legal..*

*Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PUBLICO.*

*Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arropando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal",por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en piqueza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra."*

- Como se pode observar, fóra das confusións creadas en relación coa existencia dun delito electoral ou dun expediente sancionador, esta publicación evidencia, tristemente, o intento do reclamante de instrumentalizar tamén á propia Comisión da Transparencia e involucrala nos seus manexos e teses, ao afirmar, con evidente falta de rigor que non pode ser meramente negligente, que a Comisión da Transparencia abre expediente para "identificar a letrados públicos contratados por Mar Sánchez Sierra en presuntos delitos electorales del PPdeG".



**XUNTA DE GALICIA**


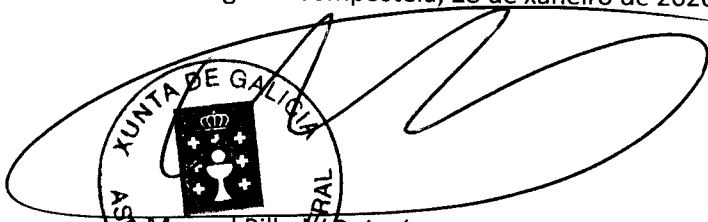
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA  
Asesoría Xurídica Xeral

Edificio administrativo de San Caetano, s/n  
15781 Santiago de Compostela  
A Coruña  
Tfno.: 981 545 898 Fax: 981 545 896  
asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal

**Por todo o exposto**, esta asesoría xurídica, entende que non pode ser acollida a reclamación do recorrente e solicitamos da Comisión de Transparencia de Galicia que se inadmita polos motivos expostos no presente informe, ou ben, de considerala admisible, que a desestime.

O Director Xeral da Asesoría Xurídica.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2020.



Manuel Pillado Quintáns

**COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA**

**XUNTA DE GALICIA**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA**ANEXO I**

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

**ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA****PR100A****SOLICITUDE****DATOS DA PERSOA SOLICITANTE**

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Miguel Angel

Delgado

González

32413124Y

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

RÚA / CALLE

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

28

2

d

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

Coruña (A)

A Coruña

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

630389871

prensa@xornalgalicia.com

**E, NA SÚA REPRESENTACIÓN** (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

**DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN**

Notifíquese a:

☒ Persoa ou entidade solicitante☐ Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

**ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE**

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

☒ **Electrónica** a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, <https://notifica.xunta.gal>. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.☐ **Postal** (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha

PARROQUIA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

A Coruña

**OBJECTO DA SOLICITUDE DE INFORMACIÓN**Secretaría de Medios Presidencia Xunta de Galicia  
Presidencia - Secretaría Xeral de Medios

Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra

Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela

TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281 FAX: 981-541277 E-MAIL: info.cata@xunta.es

En su faceta de Secretaría de Medios - y responsable de la totalidad de los servicios de información y comunicación de la

Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre Retegal.

+, AMTEGA...+, Secretaría de Medios Xunta...+, EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN...+, CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA...+, Porto de A Coruña...+, Fundación Camilo José Cela...+, y responsable de la imagen de las webs [www.ppdegalicia.com](http://www.ppdegalicia.com) y [www.feijoo.gal](http://www.feijoo.gal) y del PP de Galicia ...+

Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expone.





## XUNTA DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

## ANEXO I (continuación)

### MOTIVACIÓN (opcional)

SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.

DELGADO

GONZALEZ MIGUEL

ANGEL - 32413124Y

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ

MIGUEL ANGEL - 32413124Y

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,

serialNumber=32413124Y, sn=DELGADO GONZALEZ,

givenName=MIGUEL ANGEL, cn=DELGADO GONZALEZ

MIGUEL ANGEL - 32413124Y

Fecha: 2019.10.26 20:12:53 +02'00'

Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia

personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y

112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y

copia de la orden de personación en los procedimientos

identificando a su autor O AUTORES.

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación

**MODALIDADE QUE SE PREFIRA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN SOLICITADA,** artigo 17.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

☒ Por correo postal

☒ Por correo electrónico

☐ Presencial

### A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

### DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

☐ Documento acreditativo da representación, só cando proceda.

### INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento	Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento	A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento	O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina <a href="https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos">https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos</a> e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos	As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos	As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información	<a href="https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais">https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais</a>
Normativa:	Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas. Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

### LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

### SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

, 26 de outubro de 2019

galicia

- Secretaría Xeral da Presidencia
- Secretaría Xeral Técnica da Consellería de

CÓDIGO SOLICITUDE: 01737966

**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
<b>2019/2172338</b>	<b>26-10-2019 20:27</b>	<b>Secretaría Xeral da Presidencia</b>

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

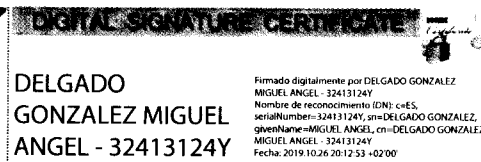
Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	0A73902D84BA5859653635DBBADEE2B9BC80495B86 B67187440A5153CC9665E
Documento acreditativo da representación	peticion-secretaria-medios-abogados.pdf	A71E83D55E8FEBB8139183C1193275109E59347E39EF 33361DB914A0ACE1B39A





**Pladesemapesga**

Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

## **Secretaria de Medios Presidencia Xunta de Galicia**

**Presidencia - Secretaría Xeral de Medios**

***Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra***

Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela

TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281 FAX: 981-541277 E-MAIL: [info.cata@xunta.es](mailto:info.cata@xunta.es)

**En su faceta de Secretaria de Medios** - y responsable de la totalidad de los servicios de información y comunicación de la Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre **Retegal.+, AMTEGA.+, Secretaría de Medios Xunta.+, EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN.+, CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA.+, Porto de A Coruña.+, Fundación Camilo José Cela.+, y responsable de la imagen de las webs [www.ppdegalicia.com](http://www.ppdegalicia.com) y [www.feijoo.gal](http://www.feijoo.gal) y del PP de Galicia.+. .**

**Asunto y síntesis de la petición:** Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expone.

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documentol y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose **¡ es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carcter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las

resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..

Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PUBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arrojando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en pinueza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación.....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de [egarante](https://www.egarante.com) | testigo de tus comunicaciones online - correo ... <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;



La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) es una asociación sin ánimo de lucro, formada por pescadores, empresarios, investigadores, ONGs, etc., que tiene como objetivo la defensa de los intereses del sector marítimo pesquero de Galicia. La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia está adherida a la Plataforma X la Honestidad.

**Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia**

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia está adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

**AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el**

**Número Registro: 539622127908-83**

europa.eu <http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>



## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUTENIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras nº 1 – 15006  
Edificio Real Fábrica de Tabacos – Plaza de la Pazoza  
Telf: 881 881 678 – Fax: 881 881 679  
jepecoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

**Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. – 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **“Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.**- Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en “La Opinión de A Coruña” el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LORFG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la





## Junta Electoral Provincial

OFICIO DE AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participan o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el periodo electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente periodo electoral

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: "Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000" y "EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos", por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el periodo electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: "TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI", y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade "La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinversión del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA", parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomente públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo



## Junta Electoral Provincial

ESTADO AUTÓNOMO DE GALICIA  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este período de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante."

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Vallalpando Lucas



**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

Id Cendoj: **15030330022018100439**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **2**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **4166/2018**

Nº de Resolución: **507/2018**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

**EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASEALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por haber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencias del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para



decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se construye a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibles que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada (sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado (sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.



La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999 ), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000 ), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

*b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*

*c) A la libertad de cátedra.*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.





Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que *"...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que "la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejerce tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.



**TERCERO.- Costas procesales.**

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

**FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

- 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.
- 2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
- 3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".
- 4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
- 5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente **D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ** al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.



## RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172335	26-10-2019 20:20	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitud (Anexo I)	Solicitud-PR100A-20191026.pdf	52F08C01E3CE345D5689B8ED1F5112D7E8196CCBE697 1EE4F0A5BBC2A2A4B62F
Documento acreditativo da representación	petición-alfonsorueta.pdf	3E0EF8F0B933E5D2834178FE34BA54A4C2E895AE036 7B4E87B38CC71ED6A616



**RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA**

A solicitude, escrito ou comunicación para Acceso á información pública. presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA	DATA E HORA DA PRESENTACIÓN	DESTINO
2019/2172337	26-10-2019 20:24	Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. Públicas e Xusticia

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:

Documento achegado	Nome do arquivo	Resumo electrónico do arquivo (Algoritmo SHA-256)
Solicitude (Anexo I)	Solicitude-PR100A-20191026.pdf	8D20C48EABF7C5319A840DEF11F506D63902FD67055 8A469B157AFF94FF0288
Documento acreditativo da representación	peticion-asesoriajuridica-xunta.pdf	09DC4A9D5A0EA0646EB45501B72C1FB689BA4D99A5D 131C3B9E6DA747183F37E





**Pladesemapesga**

Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

**Excmo. Sr D. Alfonso Rueda Valenzuela**

Edificios administrativos - San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela Tel.: 981 544 215 - Fax: 981 544 216

Asesoría Xurídica Xunta de Galicia Consellería de Vicepresidencia.

**Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expondrá.**

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documento1 y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y**

**copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose ; **es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carácter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querrellado de Mar Sánchez Sierra al que le pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le

"regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..

Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR

A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PUBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arropando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en pinueza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online - correo ... <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;



Pladesemapesga es una plataforma de defensa del sector marítimo pesquero de Galicia que surge de la necesidad de dar voz a los sectores afectados por las políticas de la UE y del Gobierno de España. La plataforma está formada por representantes de los sectores afectados y de la administración gallega. Su objetivo es defender los intereses del sector marítimo pesquero de Galicia ante las instituciones competentes. La plataforma ha sido reconocida como un actor clave en la defensa del sector marítimo pesquero de Galicia.

Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad <http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el

Número Registro: 539622127908-83

europa.eu

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>





## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO AUTÓNOMA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Lagareiras n.º 4 – 15006  
Edificio Oficial Fabrica de Tabacos – Plaza de la Palloza  
Tel: 881 881 678 – Fax: 881 881 679  
jpe@xunta.gal

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

#### **Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. – 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **“Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.-** Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en “La Opinión de A Coruña” el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioneoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

Junta Electoral Provincial de Galicia  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participen o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITACIONS EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el periodo electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JIC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente periodo electoral.

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: "Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000" y "EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos", por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el periodo electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: "TRANSFORMAR DIGITALMENTE A TUA EMPRESA, SÍ", y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade "La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinversión del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA", parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomenté públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vinculo



## Junta Electoral Provincial

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral.

VL.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este periodo de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante."

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Villalpando Lucas



**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

Id Cendoj: **15030330022018100439**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **2**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **4166/2018**

Nº de Resolución: **507/2018**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **MARÍA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

**EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por caber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencia del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para





decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se constriñe a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibile que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada ( sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado ( sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.

La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

*a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*

*b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*

*c) A la libertad de cátedra.*

*d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.



Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que *"...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que "la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejercita tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.



### **TERCERO.- Costas procesales.**

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

- 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.
- 2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
- 3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".
- 4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
- 5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

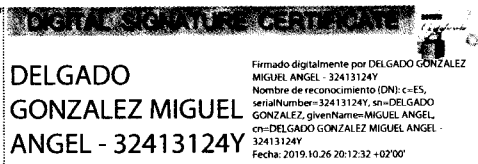
Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente **D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ** al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.



**Pladesemapesga**

Registro 2012/016402 Nif G-70321807



**Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia**

**Pladesemapesga. Inscrita Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015**

## **Dirección General de Justicia**

A la atención del Sr D. Juan José Martín Álvarez  
Director general

•Calle Madrid, 2-4 2º piso - Fontiñas  
15781 Santiago de Compostela

•Tel.: 981 546 217 - Fax: 981 546 201

•Correo-e: xustiza@xunta.gal

### **Asesoría Jurídica General**

Con copia para el Sr D. Manuel Pillado Quintáns  
Director general

•Edificios administrativos - San Caetano, s/n  
15781 Santiago de Compostela

•Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896

•Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal

**Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orde de personación en los procedimientos identificando a su autor como se expondrá.**

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, N° de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet [www.pladesemapesga.com](http://www.pladesemapesga.com) , cuya acta de poder se acompaña como documentol y como mejor proceda DICEN:

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;

Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona solicitante.

Y al amparo de la Ley 39-2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SOLICITAMOS DE FORMA EXPRESA Y CONCRETA.

**Identificación de los letrados de la Xunta de Galicia personados en los expedientes Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña y copia de la orden de personación en los procedimientos identificando a su autor O AUTORES.**

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la misma en:

Miguel Delgado denuncia que María del Mar utiliza abogados de la Xunta y fondos públicos para responder a la Junta Electoral de sus asuntos privados con el PPdeG.

**Pladesemapesga denuncia que mientras no se cese fulminantemente a Mar Sánchez Sierra de sus cargos públicos no podrá haber una campaña electoral limpia el día 10 de Noviembre de 2019.**

El PPdeG y la Secretaría de Medios que preside María del Mar Sánchez Sierra reusó asistir a la citación de la Junta Electoral recurriendo a los letrados del Gobierno Regional para personarse en el procedimiento Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 de la Junta Electoral Provincial de A Coruña cuya resolución les condena por realizar publicidad prohibida con fondos públicos de la Xunta y de Europa para beneficiar el PPdeG obligando a retirarla de todos los medios de comunicación donde estaba insertada, lo que desde PLADESEMAPESGA son muchas las voces que no entienden como letrados públicos se "han prestado a ese juego jurídico " interrogándose **¡ es que los letrados públicos no conocen la Ley !.**

La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en 2012 en la que le advertía de que **estaba PROHIBIDO echar mano de los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de cuestiones personales o de entidades privadas aunque tengan carácter público, en las que pueden solicitar un abogado de oficio.**

María del Mar Sánchez Sierra parece no haber tenido suficiente con un doblete del revés judicial en la sentencia Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327 T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA SENTENCIA: 00507/2018 Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018 que la acusa de vulnerar los derechos Constitucionales de la Libertad de Expresión y la condena en costas, que evidentemente vamos a pagar los ciudadanos/as.

El periodista Miguel Delgado Presidente también de PLADESEMAPESGA.com y querellado de Mar Sánchez Sierra al que le

pide 8 años de cárcel y 300.000 euros de daños morales, admitida a trámite por la Magistrada del Juzgado N° 1 de Santiago en este momento entrámite en la Audiencia Provincial en recurso de apelación por facilitar sentarlo en el "banquillo", enfrente de las resoluciones que ya suman más de 15 contra la Secretaría de Medios por negar, ocultar y negarse a entregar la información de como y donde se gastan los dineros públicos.

A la luz de la RESOLUCIÓN de la Junta Electoral en la que se acredita el uso de letrados del estado para responder a la citación de Mar Sánchez Sierra en el expediente del uso ilegal de FONDOS PÚBLICOS Y EUROPEOS para financiar la campaña electoral del PPdeG en medios impresos y digitales de los presuntos logros de su partido, en los Exp.- 52/2019, 111/2019 y 112/2019 por la que fue condenada a retirar los anuncios de todos los medios de comunicación, no le queda duda de la contaminación de sus servicios como responsable pública en los múltiples cargos que le "regaló" Feijóo en la Xunta de Galicia, Mar Sánchez Sierra no solo recurrió con letrados públicos una sentencia condenatoria de su departamento, si no que fué condenada en costas que vamos a pagar todos los ciudadanos/as de Galicia, y sin cortarse ni un pelo volvió a echar mano de los letrados de la Xunta de Galicia para que le defendieran en un asunto privado del uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electoralistas del PPdeG del que es Directora de Comunicación.. Todo ello pese a que la Justicia ya le obligo a pagar costas judiciales a sabiendas de que recurría algo que atentaba contra los derechos de los ciudadanos y la misma constitución, descargable en este artículo..

Dice la Junta Electoral ( descargable en este artículo) ;

La Junta Electoral considera acreditado y evidente a la luz de los documentos públicos y datos que se adjuntan, que se están utilizando "Fondos estructurales europeos" y Fondos Públicos de las campañas "Galicia Calidade" "Xacobeo 21" y "Xunta de Galicia" para financiar esas campañas de tipo político. ( que gestiona personalmente María del Mar Sánchez Sierra ).

Expediente sancionador contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia

<https://bit.ly/2N8gOnd> y <https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/> peritada online en <http://archive.is/NixFT> y <http://archive.is/NixFT#selection-719.0-729.95> y apartado <http://archive.is/NixFT#selection-613.0-625.47>

La resolución de la Junta Electoral no deja lugar a las dudas, Mar Sánchez Sierra a falta de otra información que lo contradiga ordenó a la Abogacía General de la Xunta de Galicia para que ALEGARAN Y DESPRESTIGIARAN AL PERIODISTA POR SU DENUNCIA DEL DELITO ELECTORAL, y en el que han solicitado el "ARCHIVO " del expediente oponiéndose

así al interés general del Estado y condenando a la ciudadanía que es a quien representan o deberían representar por imperativo legal..

Mar Sánchez Sierra se siente impune ante la multitud de bofetadas de la Justicia, pareciera gozar de IMPUNIDAD SUPERIOR A LA DE CUALQUIER HUMANO O AL MENOS ES LO QUE HACE CREER CON SUS REITARADAS GESTIONES DE LO PUBLICO.

Según apuntó Delgado, el uso de abogados de la XUNTA es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", no solo del máximo responsable Sr D. Alberto Núñez Feijóo como Presidente de la Xunta, si no que el responsable directo y Vicepresidente de la Xunta y Administraciones Públicas e Xustiza Sr Alfonso Rueda, junto al Xefe da Asesoría Xurídica de la Xunta, arrojando y encubriendo el uso partidista de los recursos públicos para "hacer feliz " a María del Mar Sánchez Sierra perjudicando a toda la ciudadanía, de los que dependen los servicios jurídicos, para tapar los asuntos ilegales con claros datos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS, ES EVIDENTE QUE NO SOLO ES "inmoral e ilegal", por lo que a juicio de PLADESEMAPESGA el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia debería abrir diligencias contra los "AFORADOS" y en piveza separada contra los letrados personados en los expedientes de la Junta Elecotral y principal imputada María del Mar Sánchez Sierra.

**Junto a los demás de aplicación.....**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..**

Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online - correo ... <https://www.egarante.com> cuyas referencias acreditativas se pueden ver en:



La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) es una plataforma de defensa de los intereses del sector marítimo pesquero de Galicia, formada por representantes de los sectores productivos, científicos, académicos, empresariales, administrativos, etc. La plataforma tiene como objetivo principal la defensa de los intereses del sector marítimo pesquero de Galicia ante las administraciones competentes.

**Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia**

<https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia>

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga>

**AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA**

<http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp>



**Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el**

**Número Registro: 539622127908-83**

europa.eu

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=>





## Junta Electoral Provincial

EDIFICIO XUNTA PROVINCIAL  
A CORUÑA

C/ de las Cigarreras n.º 1 - 15006  
El Dilecto Real Fabrica de Tabacos - Plaza de la Palloza  
Telf: 881 881 638 - Fax: 881 881 679  
jepcoruna@gmail.com

### *Elecciones Generales Noviembre 2019*

#### **Don Miguel Ángel Delgado González**

C/ Juan Castro Mosquera 28-2º dcha. - 15005 A Coruña

Esta Junta Electoral Provincial, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe, en relación con el asunto que asimismo se indica:

#### **"Cuarto punto del orden del día: Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019)**

Seguidamente el Sr. Secretario da cuenta de la las tres denuncias formuladas por el Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, por la publicidad institucional de la Xunta en diversos medios:

**PRIMERA.-** Expte. 52/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, publicada en "La Opinión de A Coruña" el día 02/10/2019, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Igualmente, da cuenta de que, habiéndose dado traslado al referido diario, éste manifestó que se ha limitado, con la publicación del anuncio, a dar cumplimiento a una orden contractual de inserción publicitaria a través de Agencia por encargo de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, al igual que respecto de la generalidad de los demás medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales provincial y regionales. Asimismo, manifestó que queda a disposición de esta Junta para dar cumplimiento a la decisión que pueda adoptar en orden a la regularidad de la publicidad en cuestión.

Asimismo, da cuenta de que el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite de alegaciones concedido, opuso la falta de legitimación de la asociación para interponer una reclamación electoral como la interpuesta, manifestó la inexistencia de

una campaña de logros, ya que la contratación comenzó mucho antes del proceso electoral en curso, y solicitó el archivo del procedimiento incoado.

**SEGUNDA.-** Expte. 111/2019, sobre publicidad institucional de los logros políticos de la gestión de la Xunta, en diversos medios digitales de Galicia, en concreto aporta imágenes de “laopinioncoruna.es”, una vez convocadas las elecciones generales, por entender contrario al artículo 50.2 de la LOREG. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, por tratarse de una acción comunicativa ordinaria y periódica que resulta de obligado cumplimiento por las autoridades de gestión en lo relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, sin que tenga ninguna incidencia en su encargo y realización el proceso electoral en curso.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**TERCERA.-** Expte. 112/2019, sobre la publicidad institucional de la Xunta de Galicia patrocinada con fondos públicos europeos y de otras campañas publicitarias como Xacobeo 21, Galicia Calidade en el Diario Expansión y su web bajo el epígrafe “ESPECIAL ELECCIONES 2019” del día 06/10/2019. Asimismo, solicita ordenar la retirada del anuncio, al menos, durante la campaña electoral e iniciar expediente sancionador contra los responsables que lo hayan contratado, por infracción de la obligación de neutralidad política de los poderes públicos en los procesos electorales y que centran en la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.

Asimismo, da cuenta de que, habiéndose dado traslado a la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, el Sr. Letrado de la Xunta de Galicia, cumpliendo con el trámite concedido, solicitó el archivo del procedimiento incoado en base a las siguientes alegaciones:

- 1.- Inadmisibilidad de la reclamación por falta de legitimación de la asociación denunciante
- 2.- Inexistencia de una campaña de logros, ya que el anuncio no habla de hechos, sino de proyectos. Su finalidad es informar a los potenciales interesados de la puesta en marcha del programa “Axenda industria 4.0”, de mejora, modernización y crecimiento del tejido empresarial, para que puedan hacer uso de él.
- 3.- Imposibilidad de incoar el procedimiento sancionador solicitado por el denunciante.

**La Junta**, previa deliberación, adopta el siguiente **acuerdo**:

- 1.- En sus escritos de alegaciones frente a las denuncias presentadas ante esta Junta Electoral Provincial por D. Miguel Angel Delgado González, como Presidente de la



## Junta Electoral Provincial

OFICINA AUDIENCIA PROVINCIAL  
A CORUÑA

Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, plantea la Xunta de Galicia, contra la cual se dirigen las denuncias, la falta de legitimación de la asociación reclamante. Elevada consulta sobre esta cuestión a la Junta Electoral Central, por ésta se adoptó acuerdo de fecha 17 de octubre de 2019 en el que, con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, señala que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General “no limita la legitimación activa para formular quejas o reclamaciones”, siendo una “cuestión distinta la de la legitimación para interponer recursos, que exige por esencia la titularidad de un derecho o interés legítimo específicamente vinculado al acto o resolución que se recurre”, por lo que, en definitiva, considera que corresponde a esta Junta Electoral Provincial, ante la que se presenta la reclamación, resolver en cada caso. De conformidad con este acuerdo de la Junta Electoral Central, dado que no hay ninguna disposición en la LOREG que niegue o limite la legitimación para formular quejas o reclamaciones por vulneración de la normativa electoral, a los electores y a las personas o entidades privadas que no participen o intervienen en el proceso electoral, y que, si el art. 20 de la LOREG reconoce a los electores legitimación para formular consultas a la Junta Electoral de Zona correspondiente, con mayor motivo ha de admitirse dicha legitimación ante la Administración Electoral cuando se trata de presentar denuncias o reclamaciones por infracción de las normas electorales, cuyo cumplimiento y aplicación reviste interés general, procede desestimar la falta de legitimación alegada por la Xunta de Galicia.

II.- Los hechos denunciados, consistentes en la publicación en el diario La Opinión de A Coruña, de 2 de octubre de 2019, de un anuncio patrocinado por la Xunta de Galicia con fondos públicos, en el que se contiene la mención “EN MARCHA – CEIP Novo Mesoiro, A Coruña” y “ADEMAIS DAS NOVAS OBRAS, CO APOIO DO FONDO EUROPEO DE DESEMBOLBEMENTO REXIONAL, INVERTIRONSE MAIS DE 17 MILLONS DE EUROS EN REHABILITAÇÕES EN CENTROS EDUCATIVOS”, excede de una mera campaña de información o de promoción de los servicios públicos dirigida a los ciudadanos y constituye, por su tenor literal y el contexto en el que es realizada, la expresión publicitaria de actuaciones políticas de la Xunta de Galicia, con alusiones directas a la gestión económica ejecutada en materia inversión en centros educativos, ensalzando la misma y con ello los logros obtenidos con tales actuaciones. Por ello, con independencia de que se trate de una campaña de difusión de carácter periódico, contratada o iniciada antes de convocarse el proceso electoral, y de que la información venga impuesta por el hecho de referirse a obras o servicios financiados con fondos estructurales europeos, la publicación infringe la prohibición, contenida en el art. 50.2 de la LOREG, según el cual “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, así como el principio de neutralidad de los poderes

públicos durante el período electoral que garantiza implícitamente esta norma, a fin de evitar su injerencia en el proceso electoral, mediante la organización de campañas electorales dirigidas a dar publicidad a las obras o logros realizados, de acuerdo con la interpretación realizada por la JEC en sus Instrucciones de 24 de marzo de 2011 y 4 de marzo de 2019, de manera que, durante el proceso electoral, se prohíbe que los poderes y representantes públicos, organicen o financien actos que contengan alusiones a dichas realizaciones, como ocurre en este caso. Por consiguiente, esta Junta acuerda ordenar la retirada de dicha publicidad institucional durante el presente período electoral

III.- Las consideraciones antes expuestas resultan igualmente aplicables a la los hechos que se denuncian en relación con los archivos de imagen tipo gif, publicados por la Xunta de Galicia en diversos medios, y en concreto en la edición digital del diario La Opinión de A Coruña, iniciado el proceso electoral, con el texto siguiente: “Hoxe temos o dobre de prazas públicas que en 2009, máis de 25.000” y “EN MARCHA O dobre de prazas públicas de escola infantil que hai dez anos”, por lo que también procede acordar la retirada de dicha publicidad institucional prohibida durante el período electoral en curso.

IV.- Respecto a los hechos denunciados relativos a la publicación por la Xunta de Galicia, en los mismos medios y una vez comenzado el proceso electoral, del archivo de imagen tipo gif con el siguiente texto: “TRANSFORMAR DIXITALMENTE A TUA EMPRESA, SI”, y de un anuncio en el diario Expansión de 9 de octubre de 2019, con la misma redacción, a la que se añade “La Xunta de Galicia contribuirá a movilizar 900M euros hasta 2022 a través de la Agenda Industrial 4.0 con el objetivo de promover el talento y la reinversión del tejido industrial. Si no quieres que tu empresa se quede en otra época, actualízate. GALICIA ES INNOVADORA”, parece responder a una campaña destinada a promover que los empresarios acometan determinadas actuaciones innovadoras mediante la transformación digital de sus empresas, sin que la mera circunstancia de que haya un proceso electoral abierto constituya en sí misma un impedimento para que la Administración incentive o fomenté públicamente tales iniciativas, e informe de su futura subvención con fondos públicos, salvo que se trate de anuncios que de forma clara, manifiesta y sistemática supongan una publicidad de las realizaciones o los logros obtenidos, con el fin de influir u orientar el voto de los electores, susceptible de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral, lo que no se aprecia en la publicidad objeto de denuncia.

V.- Finalmente, en lo que se refiere a la denuncia formulada sobre determinados actos de supuesta publicidad institucional de la Xunta de Galicia en diversos medios, en concreto en el Especial dedicado a Galicia del diario Expansión, de 9 de octubre de 2019, se trata en este caso de una entrevista realizada al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, en la que éste se pronuncia acerca de diversas cuestiones políticas y de gestión pública que son de interés general para los ciudadanos, correspondiendo al medio de comunicación, y no a la persona entrevistada, la iniciativa en la celebración de este acto, el contenido de las preguntas realizadas, y la publicación de aquellos aspectos considerados de interés informativo o periodístico en el contexto actual. En cuanto a la intervención del Sr. Presidente de la Xunta de Galicia en el Foro La Toja-Vínculo



## Junta Electoral Provincial

EL COMITÉ AUTÓNOMO PROVINCIAL  
A CORUÑA

Atlántico, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2019 y organizado por una entidad privada, en el que acompañó al Rey Felipe VI, junto con otras autoridades y representantes públicos, además de su dimensión protocolaria, se limita a hacer una defensa de los valores sociales que impulsa dicho Foro y de la mejor forma de abordar los temas objeto de debate en este encuentro. Además, la denuncia presentada por estos hechos ante la Junta Electoral Central fue archivada por acuerdo de 17 de octubre de 2019. Por ello, no cabe apreciar que estas actuaciones, ni las demás noticias que se denuncian de manera genérica y descontextualizada, supongan una verdadera publicidad institucional, subvencionada con fondos públicos, de las realizaciones o los logros obtenidos, en la que, más allá de una legítima finalidad informativa de la gestión política ordinaria, se persigan específicos fines electorales y de captación de sufragios, capaz de vulnerar la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG y el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral.

VI.- En consecuencia, esta Junta acuerda ordenar la retirada de la publicidad institucional prohibida, mencionada en los apartados II y III de esta resolución, durante el presente proceso electoral, y requerir a la Xunta de Galicia y a los medios afectados para que, en este periodo de tiempo, se abstengan de dicha actividad, con desestimación de las demás peticiones formuladas.

Póngase este acuerdo en conocimiento de la Xunta de Galicia, de los responsables de los medios de comunicación referidos y del denunciante.”

Lo que se le remite a efectos de notificación.

A Coruña, 18 de octubre de 2019

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Fdo. Lorenzo Villalpando Lucas



**Roj: STSJ GAL 4327/2018 - ECLI: ES:TSJGAL:2018:4327**

Id Cendoj: **15030330022018100439**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **2**

Fecha: **25/10/2018**

Nº de Recurso: **4166/2018**

Nº de Resolución: **507/2018**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 A CORUÑA**

**SENTENCIA: 00507/2018**

**Procedimiento especial protección Derechos Fundamentales de la persona nº 4166/2018**

**EN NOMBRE DEL REY**

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA**

Ilmos. Sres. y Sras. Magistrados

D<sup>a</sup>. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES

D<sup>a</sup>. MARÍA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

En la ciudad de A Coruña, a 25 de octubre de 2018.

En el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, que con el número 4166/2018 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación "Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) y asistida del Letrado D. Pablo No Couto, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Es parte demandada la Secretaría General de Medios de la Presidencia de la Xunta de Galicia, representada y dirigida por el Letrado de sus servicios jurídicos. E interviene el Ministerio Fiscal.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Es Ponente la Magistrada D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que remitiera el expediente.



**SEGUNDO.-** Mediante diligencia de ordenación se acuerda su entrega a la parte demandante para que formulara la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se tenga por formalizada y se dicte sentencia por la que se declare la infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, declarando por tanto la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas, con imposición de costas a la Administración demandada.

**TERCERO.-** Por diligencia se tuvo por presentada la demanda y se dio traslado a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo cual efectuó interesando en el suplico que se desestimara el recurso, confirmando la resolución impugnada.

Y por el Ministerio Fiscal se informó en el sentido de que procedía dictar sentencia declarando la lesión del derecho a crear medios de comunicación social de la asociación recurrente.

**CUARTO.-** Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó el recibimiento del pleito a prueba, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta, consistente en documental y dándose traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose el día 18 de octubre de 2018 para deliberación.

**QUINTO.-** En la substanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### **PRIMERO.-** *Acto objeto del recurso y fundamentación jurídica de la demanda, contestación e informe del Ministerio Fiscal.*

El objeto del presente recurso lo constituye la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.

Se considera en la demanda que se vulnera el artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Lo que interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, que acuerda la advertencia, por cuanto por medio de la resolución recurrida no se la sanciona, y la demandante considera que en tanto no se regule, está en una situación transitoria.

La demandante considera que existe una garantía temporal de emisión amparada en la DT 14ª de la Ley 7/2010. Y la demandada, ante las dudas, resuelve no sancionar al no existir dolo, pero sí que indica que no existe esa garantía temporal de emisión que le sea aplicable a la demandante, por lo que decide advertir de la prohibición del ejercicio de la actividad de emisión por haber la posibilidad de ejercer las facultades sancionadoras de que en este momento decide no hacer uso.

La parte demandante considera vulnerado el derecho del artículo 20.1.a) y c) -en realidad d)- de la CE, en cuanto que se reconoce el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información.

Y en segundo lugar se alega en la demanda sobre el referido régimen transitorio de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y la doctrina del Tribunal Supremo al amparo del artículo 20.1 de la CE sobre la garantía temporal de emisión como cobertura para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Ante la inactividad de la Administración, correspondiendo al Estado la habilitación del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios y a la Comunidad Autónoma el otorgamiento del título habilitante.

En el escrito del Ministerio Fiscal se hace referencia a que la asociación demandante utiliza la emisora CUAC-FM prácticamente desde su constitución hace dos décadas, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones, realizando una actividad pública y notoria, no clandestina, en la utilización del espacio radioeléctrico, utilizando espacios de la Universidad de A Coruña y recibiendo subvenciones por parte de



Administraciones públicas. No se trata de una actividad lucrativa. Pero carece de la licencia precisa para ejercer como emisora.

Hace referencia a los intentos de la demandante por regularizar su situación. Y de todo ello deduce el incumplimiento de la obligación de promover las condiciones para que los interesados puedan acceder a la creación de medios de comunicación.

Igualmente hace referencia a la regulación reglamentaria, en Galicia, por Decreto 102/2012, de 29 de marzo, que contiene la referida DT 14ª, cuya aplicación impide la consideración de la existencia de infracción - STS de 15 de marzo de 2013-. Considera también que se ha efectuado una interpretación contra legem del artículo 20.1 de la CE por la resolución recurrida y se ha infringido el régimen transitorio y el derecho fundamental, dada la contradicción entre la garantía temporal que impide la apreciación de la existencia de infracción y la decisión de prohibición y advertencia de sanción.

La parte demandada considera que el ámbito de aplicación de la DT 14ª es más reducido y que a lo que se refiere es a las televisiones comunitarias. Que la cuestión es interpretable. Y es muestra de ello el que la Administración archive el procedimiento por considerar la existencia de error. Y entiende que ha de ser televisión de proximidad.

Además añade que en el concurso de 2012 para el otorgamiento de licencias, no obtuvo la demandante la licencia que pretendía. Y niega la pretendida vulneración del derecho fundamental. Refiere que la demandante, desde 2017 emite por internet y que para ello no precisa de licencia. Se refiere a la sentencia de este Tribunal dictada en autos de PO 4794/2012, siendo parte de ese grupo que recurrió la entidad aquí demandante, sentencia en que se desestima el recurso contra la resolución de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Y que la imposibilidad de acceso a las licencias previstas en el artículo 32 de la Ley 7/2010 no es atribuible a la Xunta de Galicia, además de que la imposibilidad de acceder a esas específicas licencias no determina la imposibilidad de la recurrente de emitir, al existir alternativas, como son las licencias ordinarias. Y sostiene la inexistencia de lesión a libertades y derechos fundamentales. Finalmente se refiere al alcance de la DT 14ª de la Ley 7/2010 y de la garantía temporal de las emisiones en las sentencias del Tribunal Supremo.

#### **SEGUNDO.- Fondo del recurso.**

Ha de partirse de la modificación de la normativa audiovisual por la Ley 7/2010, que en su artículo 32 regula los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y que en su DT 14ª prevé un período en que los operadores en el servicio audiovisual podrán seguir operando hasta que se regule por el Estado, previendo la concesión de las oportunas licencias, sin que se haya producido aún la regulación normativa en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Lo que dispone la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su Disposición transitoria decimocuarta, sobre los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes, es que *"1. Los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad.*

*2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley".*

Por otra parte, el derecho de creación de medios de comunicación a través de los que difundir ideas, opiniones e información es una manifestación de las libertades reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) de la CE y así lo reconoce el Tribunal Constitucional.

Lo que se suscita es si la entidad demandante entra dentro del ámbito de aplicación de la referida normativa.

Reiterada jurisprudencia constitucional ha proclamado que el ámbito jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales está exclusivamente establecido para tutelar los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, conforme determinan los arts. 53.2 y 161.1 CE y 41.1 LOTC, sin que tal procedimiento permita examinar cualquier pretendida infracción del ordenamiento jurídico ni resolver en relación con temas o cuestiones de estricta legalidad ordinaria, pues su ámbito se circunscribe a determinar si el acto o disposición que se impugna vulnera directamente aquellos derechos, por lo que solo sobre las pretendidas violaciones de los derechos fundamentales puede versar el examen del Tribunal, bien entendido que es posible que para





decidir sobre la conformidad jurídica del acto hubiera de realizarse previo examen de las normas de carácter inferior a la CE, por lo que las alegaciones sobre pretendidas violaciones del ordenamiento jurídico basadas en preceptos distintos de los constitucionales de referencia o sobre supuestas irregularidades del acto no pueden ser tomadas en consideración dentro del cauce de este procedimiento.

Precisamente y en este sentido se pronuncia la STSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 16-2-2005, nº 99/2005, recurso 252/2004, al afirmar que conviene aclarar que, con arreglo al artículo 114.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el ámbito del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se constriñe a las libertades y derechos recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, es decir, los reconocidos en los artículos 14 a 29 de la propia Constitución, y que también ha de ponerse de manifiesto lo inadmisibile que resulta que bajo el cobijo genérico de imputación de una actuación administrativa continuada se pretenda la impugnación de actos firmes, por no haberse agotado la impugnación en su momento, y que, por ello, fueron consentidos.

Y que conviene delimitar el objeto de este proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, antes regulado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 62/1978 y hoy en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para dejar claro que aparece limitado a los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, de modo que el examen en su seno, como ha mantenido el Tribunal Supremo desde su sentencia de 14 de agosto de 1979 hasta la de

17 de octubre de 2000, no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del poder público influye, daña o infringe dichos derechos fundamentales, debiendo quedar reservada al recurso ordinario cualquier otra cuestión relativa a la legalidad ordinaria del acto o disposición impugnada ( sentencias del Tribunal Constitucional 37/1982, de 16 de junio, y 84/1987, de 29 de mayo, y del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986, 22 de diciembre de 1990, 2 y 7 de junio de 1991), por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado, ha de incidir en la esencia o desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual supone que no basta invocar la infracción de uno de los tutelados sino que se requiere, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido ha sido vulnerado ( sentencias de 12 de junio de 1984, 7 de diciembre de 1987 y 25 de junio de 1988).

Aplicada la doctrina expuesta al supuesto litigioso, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de fondo, de legalidad ordinaria, es interpretable. Es muestra de ello que la Administración archiva el procedimiento por considerar la existencia de error. Pero lo que le interesa a la parte demandante es la segunda de las consideraciones de la resolución recurrida, puesto que lo que se acuerda es:

1. finalizar el procedimiento sancionador con el archivo de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.1.d) de la Ley 39/2015, por apreciar la inexistencia de responsabilidad.
2. Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento.

Por consecuencia, carece de objeto el recurso en lo referente a la imposición de la sanción, por cuanto la misma se ha dejado sin efecto, pero se plantea la cuestión referente a si la disposición transitoria se refiere a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro o se refiere a la televisión de proximidad, cuestión que realmente corresponde a la legalidad ordinaria, referente a que se trata de una garantía temporal de emisión y se suscita la duda sobre si el régimen transitorio es de aplicación a las actividades de radiodifusión realizadas por servicios de comunicación audiovisuales.

En la resolución recurrida se considera que pudo haber un error de interpretación en la normativa por la demandante. Pero que las aclaraciones que se le dan en la resolución sirven para despejar cualquier duda y por eso se contiene la advertencia. Por ello y además de considerar que no hay infracción y que no procede imponer sanción, sin embargo contiene una advertencia de futuro, pero no se hace un requerimiento o apercibimiento formal, con los requisitos legales, concretando qué es lo que se le impide a la recurrente y conteniendo las prevenciones legales. Por eso esta medida, tal y como informa el Ministerio Fiscal, conlleva una orden de cese de la actividad de emisión audiovisual, garantizada por el artículo 20 de la CE, porque además y ante la ausencia de desarrollo normativo, nada puede hacer la demandante para legalizar su situación.

El expediente sancionador se inicia por la carencia de licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

Es cierto que para poder ejercerlo se precisa de un procedimiento de concesión de licencia al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual.



La resolución lo que hace, en definitiva, es prohibir y advertir de la comisión de infracción en caso de desobediencia por falta de licencia, que no se puede obtener dada la inactividad de la Administración. A la demandante no se le aplica la DT 14ª que contiene lo que ha denominado el Tribunal Supremo una "garantía temporal de emisión".

Con relación a la cuestión de legalidad ordinaria en que insiste la parte demandada, en la STS, Contencioso sección 3 del 11 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1069/2013 - ECLI:ES:TS:2013:1069), Recurso: 6821/2009, se hace referencia a la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 270/2005), en que se sienta la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de la disposición transitoria única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión local por ondas terrestres, en los siguientes términos:

*« [...] En efecto, según hemos sostenido en la sentencia de esta Sala de 4 de marzo de 2004 (RC 5280/1999 ), con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la precedente sentencia de 17 de marzo de 2003 (RC 1599/2000 ), la garantía temporal de emisión que se desprende de la interpretación autorizada de la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atendida la naturaleza de este tipo de Disposiciones de Derecho Transitorio, permite el funcionamiento de las televisiones locales que estaban emitiendo con anterioridad al 1 de enero de 1995, al gozar, en virtud de dicha disposición legal, de un estatuto que legitima el mantenimiento de la actividad de operadores de televisión local, supeditado a solicitar la correspondiente concesión, una vez que se hayan desarrollado reglamentariamente las prescripciones legales y se hayan convocado los correspondientes concursos, que, sin embargo, no confiere un derecho indiscriminado a conservar las frecuencias radioeléctricas que venían utilizando sin autorización ».*

También corresponde a la legalidad ordinaria el análisis referente a si la demandante participó en el concurso a que se refiere la sentencia de este Tribunal en que se impugnaba la convocatoria del concurso, si bien manifiesta la parte actora que inicialmente se excluía a los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro, y que aunque participó, no cumplía el requisito básico de tener carácter comercial.

Pero de lo que aquí se trata es de si se ha producido o no vulneración de derechos constitucionales. Y el derecho cuya vulneración sostiene la parte demandante es el contenido en el artículo 20 de la CE, que dispone que " 1. Se reconocen y protegen los derechos:

- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- c) A la libertad de cátedra.
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Resulta fundamental la libertad de expresión en la democracia dado que permite el debate e intercambio de ideas, constituyendo una manifestación de la libertad de pensamiento, y que a su vez implica deberes y responsabilidades para proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.

Ha de partirse de que el derecho a la libertad de información es uno de los pilares sobre los que se sustenta un Estado democrático, puesto que es a través de su ejercicio como se forma una opinión pública libre, razón por la que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en nuestra Constitución y un Derecho Humano protegido por los textos internacionales, que son de obligado respeto por el Estado y sus instituciones y poderes.



Es cierto, como refiere la Administración, que si se archiva no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero también se le está advirtiendo de que es una actividad prohibida y de que puede ser sancionada.

Con relación a los derechos invocados en la demanda, en la STC, Constitucional sección 1 del 08 de mayo de 2014 (ROJ: STC 73/2014 - ECLI:ES:TC:2014:73), Sentencia: 73/2014 Recurso: 2155/2004, se recuerda su doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, si bien especialmente se refiere a la vertiente de lo que ha venido en llamarse "derecho de antena", como libertad de creación de medios de comunicación. E indica que *"...Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que "la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [ art. 20.1 a) CE ] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE ], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades"*.

Aplicando tal doctrina, lo cierto es que en este caso se está advirtiendo a la demandante de que de verificar una nueva emisión radiofónica, a pesar de que no existe el desarrollo normativo para poder obtener la correspondiente licencia, será sancionada.

Lo que suscita la parte demandada es que la garantía de emisión temporal que contiene la referida DT 14ª, no es de aplicación a una asociación sin ánimo de lucro como es la demandante, que se incluye dentro de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero realmente y con la advertencia contenida en la resolución recurrida, se está prohibiendo la emisión. Y todo ello al margen de la discusión que pueda existir sobre el ámbito de aplicación de la referida normativa transitoria, cuestión de legalidad ordinaria que no puede ser analizada en el presente procedimiento especial. Tampoco procede el análisis de la interpretación restrictiva que efectúa sobre el ámbito de aplicación del derecho a optar por licencias o autorizaciones.

En todo caso, la referida disposición ampara a todos los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, y se ejercita tal derecho al amparo de la DA 18ª de la Ley 56/2007.

Y aunque el desarrollo reglamentario que permita a la demandante obtener la correspondiente licencia le corresponda al Estado, en el presente procedimiento no se trata de establecer la responsabilidad de la Administración autonómica en dicha cuestión sino de verificar si con su decisión de advertir, en el segundo apartado de la resolución recurrida, y a pesar de su decisión de archivo del procedimiento sancionador, se puede considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales que sostiene la parte demandante, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto se aprecia que así ha sido.

No obstante, lo que se interesa en la demanda es, por una parte, que se declare la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Pero también que se declare la vigencia de la garantía temporal de emisión también para la recurrente y condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, en el punto segundo de la resolución recurrida se contiene una advertencia innecesaria y no se da solución a la parte demandante dadas las dudas que se suscitan en la interpretación de la normativa aplicable y dada la contradicción apreciada entre los dos pronunciamientos que contiene la misma. De esta ambigüedad no puede sino deducirse que se está perturbando el ejercicio de los derechos fundamentales que se denuncia en la demanda, de forma que si bien la cuestión de legalidad ordinaria no procede ser analizada, no obstante lo cual y una vez verificado que se ha producido la vulneración del derecho constitucional, lo que sí que procede es que sea anulado el segundo apartado de la resolución recurrida, es decir, anular la advertencia de que la motivación de la resolución recurrida rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Y ello en tanto por la Administración demandada no se dicte resolución en que de forma motivada y clara se pronuncie sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión. Ha de añadirse que no le es posible recurrir contra la prohibición porque realmente no queda claro que se le esté prohibiendo, de forma que además ha de apreciarse que la vulneración asimismo resulta de la incertidumbre generada. Por consecuencia procede la estimación de la demanda en los términos expuestos.



### **TERCERO.- Costas procesales.**

En atención a las dudas interpretativas suscitadas, no procede hacer imposición del pago de las costas procesales ( artículo 139 de la LJCA).

### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

- 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el Procurador D. Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos (CUAC), contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018 por la que se acuerda la finalización del expediente San. SXMEDIOS 16/2017 con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad de emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe, con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión, y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición.
- 2) Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1 a) y d) de la Constitución española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
- 3) Anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida, en cuanto que acuerda "Advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento".
- 4) Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente en tanto la Administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
- 5) Sin imposición del pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente Sección de esta Sala, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional, que habrá de prepararse mediante escrito a presentar en esta Sala en el plazo de treinta días y cumpliendo los requisitos indicados en el artículo 89.2 de dicha ley.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Ponente **D<sup>a</sup> MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ** al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, lo que yo, Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

## ORDE DO DÍA. COMISIÓN DA TRANSPARENCIA DE GALICIA. XXXIX SESIÓN

Seguindo as indicacións da presidenta da Comisión da Transparencia **CONVOCO** a XXXIX sesión da Comisión da Transparencia, que terá lugar na **sede do Valedor do Pobo** (Rúa Hórreo, 65, Santiago de Compostela) o 3 de Marzo de 2020 ás 12 horas en primeira convocatoria e 12.15 h en segunda, coa seguinte **orde do día**:

- 1) Saúda da presidenta.
- 2) Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
- 3) Resolución se procede dos seguintes expedientes tramitados: RSCTG/179/19, RSCTG/180/19, RSCTG/182/19, RSCTG/183/19, RSCTG/184/19, RSCTG/185/19, RSCTG/1/20, RSCTG/2/20, RSCTG/3/20, RSCTG/4/20, RSCTG/5/20, RSCTG/6/20, RSCTG/7/20, RSCTG/8/20, RSCTG/9/20, RSCTG/10/20, RSCTG/11/20, RSCTG/12/20, RSCTG/13/20, RSCTG/14/20, RSCTG/15/20, RSCTG/18/20, RSCTG/21/20 e RSCTG/25/20.
- 4) Determinación da data da próxima reunión da Comisión.
- 5) Rogos e preguntas.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2020

SANTIAGO  
GONZALEZ  
SERRANO -  
32650145N

Firmado digitalmente  
por SANTIAGO  
GONZALEZ SERRANO  
- 32650145N  
Fecha: 2020.02.26  
09:20:09 +01'00'

<b>Nº EXPEDIENTE: RSCTG 1/2020</b>		
<b>RECLAMANTE: D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)</b>		
<b>Data <u>solicitud</u> acceso á información pública</b> <b>26/10/2019</b>	<b>Data <u>resolución</u> pola Administración</b> <b>Non consta</b>	<b>Data <u>reclamación</u> ante a Comisión da Transparencia</b> <b>3/1/2020</b>
ASUNTO: Reclamación contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.		
TITULAR DA INFORMACIÓN: Secretaría Xeral de Medios e Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia		
TERCEIROS INTERESADOS: Non constan		
<b>PROPOSTA DE RESOLUCION</b>		
<b>Data da proposta de resolución</b> <b>5/2/2020</b>	<b>SENTIDO DA PROPOSTA</b> <b>Estimación</b>	

Visto o expediente RSCTG 1/2020 o instrutor Santiago González Serrano remite a seguinte proposta de resolución para a súa aprobación, se procede, pola Comisión da Transparencia.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2020



Santiago González Serrano

D. Miguel A Delgado González, Plataforma en  
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de  
Galicia (PLADESEMAPESGA)  
R/Juan Castro Mosquera 28 2º dereita  
15005 A Coruña

### *Proposta de resolución*

Reclamante: D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)

Expediente. Nº **RSCTG 1/2020**

Correo electrónico:

**ASUNTO: Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia na reclamación presentada ao amparo do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno**

Vista á reclamación presentada por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), mediante escrito que tivo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, e considerando os antecedentes e fundamentos xurídicos que se especifican a continuación, a Comisión da Transparencia na sesión celebrada o día [Haga clic aquí para escribir una fecha.](#), adopta a seguinte resolución:

## ANTECEDENTES

**Primeiro.** D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) presentou, mediante escrito con entrada no rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, unha reclamación ao amparo do disposto no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

O reclamante indicaba que se solicitou información sobre identificación dos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 da Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de personación nos procedementos identificando ao seu autor.

O escrito viña acompañado de copia da solicitude presentada, de copia dun acordo da Xunta Electoral Provincial da Coruña e de copia da dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

**Segundo.** Con data do 7 de xaneiro de 2020 déuselle traslado da documentación achegada polo reclamante á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia para que, en cumprimento da normativa de transparencia, achegase informe e copia completa e ordenada do expediente.

A recepción da solicitude pola administración foi o 14 de xaneiro de 2020.

**Terceiro.** Con data 3 de febreiro de 2020 a Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia contesta a petición remitindo o informe solicitado.

A Dirección Xeral da Asesoría Xurídica emite o informe dado que a pesar de que a reclamación se dirixe formalmente contra a falla de contestación dunha solicitude á Secretaría Xeral de Medios, a competencia sobre a materia corresponde á dita Asesoría.

O informe considera que dada a natureza da solicitude e o seu obxecto, son cuestións que non forman parte do dereito de acceso á información pública, tendo a mesma un carácter abusivo, non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei.

Considera que pese a que o escrito de solicitude se tivese cualificado polo recorrente como de información pública, o seu contido real responde ao dunha denuncia consistente en poñer en coñecemento da administración unha serie de feitos que estima constitutivos dunha conduta incorrecta ou desviada, aludindo a que existen "claros datos" de delito.



O que no escrito se engade como motivación, son os feitos que denuncia, polo que debe prevalecer a natureza de denuncia, sendo a solicitude de información meramente instrumental da denuncia que se formula, e non ser por tanto a súa falta de resposta un acto susceptible de reclamación en materia de acceso á información pública.

A circunstancias concorrentes no presente caso, revelan unha utilización desviada e abusiva da lexislación de transparencia para conseguir outras finalidades e a información concreta que solicita o reclamante resulta meramente trivial e non tería esta asesoría xurídica ningún problema en facilitarlla, se ben entende que non está cuberta pola lexislación de transparencia.

A petición de información, de identificación dos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019 da Xunta Electoral Provincial de A Coruña e copia da orde de personación nos procedementos, identificando ao seu autor, illadamente considerada, se non explicitase o escrito a motivación que contén, e sen integrala nas teses conspiratorias do reclamante, é inocua, pois podería ser respondida meramente indicando que non houbo unha personación formal da asesoría da Xunta nos procedementos indicados, nin esta é necesaria, senón que simplemente se efectuaron as alegacións para as que foi emprazada pola propia Xunta Electoral, e non existiu unha específica orde de personación, dado que non resulta necesaria legalmente, sendo as alegacións asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como é practica habitual. Esta contestación non impediría considerar que a información solicitada non ten acomodo realmente no concepto de información pública que recolle a lexislación de transparencia, por canto o solicitante pide un documento que non existe, como é a orde de personación que el presume ditada e o dereito a acceder a documentos inexistentes non forma parte do contido do dereito á información pública, como teñen aclarado diversas resolucións do Consello de Transparencia e da Comisión Galega da Transparencia. A petición debe ser inadmitida por canto o que o reclamante pretende é que se lle confirme a súa tese, ou se lle contradiga, aspectos que desbordan o dereito á información pública.

A identificación dos letrados personados tampouco se pode considerar un contido ou documento que sexa obxecto do dereito á información pública. O interesado non solicita copia dos escritos de alegacións presentados, que lle permitiría coñecer ao seu autor que como parte no procedemento ante a Xunta Electoral podería solicitalos e obtelos ante esta sen necesidade de acudir a unha solicitude de información pública nin de presentación de reclamación ante a Comisión de Transparencia. Neste senso e de acordo coa disposición adicional primeira 1 da Lei 19/2013, ao tratarse do acceso por parte dun interesado a un

documento de alegacións que figura nun procedemento non debe rexerse pola lexislación de transparencia.

Ademais considera que a identificación das autoridades ou persoal que participan nos procedementos non é información pública, senón un dereito distinto que se regula no artigo 53.1.b) da Lei 39/2015, e referido soamente aos interesados nun procedemento, polo que entende que concorre a causa de inadmisión da reclamación de que a información solicitada non existe ou non é constitutiva de información pública. Non se poden entender que o reclamante estea solicitando *información pública* no sentido técnico da normativa en materia de transparencia, dado que a contestación ao solicitante, involucra unha valoración xurídica sobre os feitos que alega.

Entende o informe que a reclamación debe ser desestimada porque a solicitude incorre na causa de inadmisión do artigo 18.1.e) da Lei 19/2013, por ter un carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei, dado que no presente caso, faise unha imputación de feitos delitivos cunha tipificación concreta que, a xuízo do denunciante, deberían xustificar a apertura de dilixencias penais. O contido difamatorio e insultante do escrito resulta elemento de xuízo suficiente para percibir na intención do seu autor un abuso de dereito, tendo en conta que sobrepasa manifestamente os límites normais do exercicio dunha petición de transparencia, e atribúe conspiracións delitivas a todo un conxunto de autoridades públicas.

Así mesmo non pode considerarse que a solicitude formulada estea xustificada coa finalidade da Lei, dado que o seu obxecto real é formular unha tese delitiva conspiratoria e atribuír actuacións que presume a determinados cargos, pretendendo o denunciante expoñer como, ao seu entender, se adoptaron unhas decisións que afirma delitivas, polo que a súa petición non pode ser reconducida a ningunha das finalidades sinaladas na normativa de transparencia.

Non existe ademais un interese xeral obxectivo na divulgación da información solicitada senón dun interese persoal e subxectivo acreditado polo feito de que ten un proceso penal pendente no que a querelante é a Secretaría Xeral de Medios.

Outro indicio do carácter abusivo da petición de información e o seu fundamento nunha finalidade distinta das previstas na lei é a forma de presentación da petición, dado que se presentaron varias solicitudes de acceso co mesmo contido, dirixidas a distintos órganos, como indicamos nos antecedentes. Isto fai ver que o que pretende o denunciante é a difusión das súas teses, ou incluso dificultar o funcionamento dos servizos ou intentar

provocar unha resposta descoordinada da administración, máis que buscar de modo eficiente ou útil unha concreta resposta.

Os datos anteriores deben ser postos en relación coa tese manifestamente irracional que sostén o denunciante sobre os feitos que dan orixe a esta reclamación. So cunha evidente mala fe pode entenderse que os letrados da administración están defendendo a actuación persoal ou privada da Secretaría Xeral de Medios. O agora reclamante presentou unhas denuncias ante a Xunta Electoral Provincial da Coruña sobre campañas institucionais de comunicación contratadas pola administración autonómica e a Xunta Electoral emprazou para contestar á administración autonómica. A asesoría xurídica da Xunta de Galicia contestou defendendo en dereito a actuación da administración autonómica e a resolución da Xunta Electoral en ningún caso aprecia esta a existencia dunha conduta constitutiva de infracción electoral nin ordena a apertura dun procedemento sancionador, desestimando as peticións do reclamante neste sentido.

De acordo co disposto no artigo 1 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, a asistencia xurídica e o asesoramento en dereito e a representación e defensa en todo tipo de procesos xudiciais e ante órganos administrativos prestada pola asesoría xurídica da Xunta, polo que defender un acto da administración ante unha xunta electoral forma parte da asistencia prevista legalmente, e sen que a Lei esixa dunha específica orde de persoarse nun procedemento para facer alegacións cando se cita á administración autonómica, e de feito non existiu esa orde neste caso.

Así mesmo, debe terse en conta a actitude coetánea no tempo do reclamante, que amosa que as súas finalidades son outras ben distintas da transparencia, finalidades nas que a presente reclamación se integra como unha peza máis:

O interesado, no medio dixital Xornal de Galicia (instrumento utilizado xunto con PLADESEMAESGA polo reclamante) publica noticias sobre a Secretaría Xeral de Medios e sobre a propia Comisión da Transparencia, baixo títulos enganosos para crear confusión interesada sobre as reclamacións ou denuncias presentadas.

Considera por tanto que a reclamación non pode ser acollida e solicita que se inadmita ou ben, de considerala admisible, que se desestime.

## **FUNDAMENTOS XURÍDICOS**

### **Primeiro. Competencia e normativa**

O artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, de carácter básico na súa práctica totalidade, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información, poderá interpoñerse unha reclamación ante o *Consello de Transparencia e Bo Goberno*, con carácter potestativo e previa a súa impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa mesma lei, na súa disposición adicional cuarta, establece que a resolución da reclamación prevista no artigo 24 corresponderá, nos supostos de resolucións ditadas polas Administracións das Comunidades autónomas e o seu sector público, e polas Entidades Locais comprendidas no seu ámbito territorial, ao órgano independente que determinen as Comunidades Autónomas.

O artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información pública, poderá interpoñerse unha reclamación ante o Valedor do Pobo, correspondendo á Comisión da Transparencia, de acordo co disposto no artigo 33, a resolución das devanditas reclamacións.

### **Segundo. Procedemento aplicable**

O artigo 28.3 da citada Lei 1/2016 establece que o procedemento de reclamación axustarase ao previsto nos parágrafos 2, 3, e 4 do artigo 24 da Lei 19/2013, que establece que as reclamacións contra resolucións en materia de acceso á información, que ten carácter potestativo e previo á impugnación en vía contencioso-administrativa, axustarán a súa tramitación ao disposto na lexislación de procedemento administrativo común en materia de recursos.

### **Terceiro. Dereito de acceso á información pública**

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, recoñece no seu artigo 24 o dereito de todas as persoas a acceder á información pública, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións, do mesmo xeito que a definición contida no artigo 13 da Lei estatal 19/2013 que ten carácter básico.

O concepto de información pública e o dereito de acceso á mesma configúranse de forma ampla tanto na normativa autonómica como na estatal. Os titulares do dereito son todas as persoas, sen que o solicitante estea obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información (art. 26.4 Lei 1/2016, do 18 de xaneiro).

O obxecto da Lei 19/2013, é ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública e regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela actividade (art. 1). No seu

preámbulo sinala que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixos fundamentais de toda acción política e só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións pódese falar do inicio dun proceso no que os poder públicos comezan a responder a unha sociedade que é crítica, esixente e que demanda participación dos poder públicos.

Pola súa banda, a Lei galega 1/2016, sinala na súa Exposición de Motivos que a crecente esixencia cidadá de control público da actuación das administracións aconsella a aprobación dunha norma que supera os anteriores estándares e que se concreta nun texto legal que establece esixencias engadidas de transparencia e acceso á información pública.

#### **Cuarto. Prazo para a interposición do recurso**

O artigo 28.3 da Lei 1/2016, establece que o procedemento das reclamacións fronte ás resolucións en materia de acceso á información pública axustarase ao previsto no artigo 24 da Lei 19/2013.

O artigo 24 da Lei 19/2013 establece que fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso a información poderá interpoñerse unha reclamación con carácter potestativo e previo á súa impugnación na vía contencioso-administrativa.

Esta reclamación interpoñerase no prazo dun mes para contar desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou desde o día seguinte a aquel no que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Tal e como establece o Criterio Interpretativo 1/2016, do Consello de Transparencia e Bo Goberno, de acordo con reiterada doutrina xurisprudencial e coas previsións normativas contidas nos artigos 122 e 124 da Lei 39/2015, poderanse interpoñer recursos de alzada e reposición, respectivamente, respecto de resolucións presuntas en calquera momento fronte a actos que non sexan expresos.

Dado que segundo consta na documentación remitida polo interesado, a súa solicitude de acceso á información presentouse con data do 26 de outubro de 2019, sen que se lle notificase resolución expresa, e a reclamación a presentou con data de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2019, tendo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 2 de xaneiro de 2020, remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia e remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia, polo que debe admitirse por estar presentada en prazo.

## Quinto.- Análise do expediente

O dereito de acceso á información pública está configurado na Lei como un dereito de amplo ámbito obxectivo e subxectivo e, especialmente, o concepto de información pública e, por tanto o posible obxecto dunha solicitude de información que a Lei consagra é todo contido ou documento que obre en poder dun organismo suxeito á norma que fose obtido ou elaborado no exercicio das súas funcións. Por tanto, pode ser obxecto dunha solicitude de acceso, calquera información que posúa o organismo ou entidade ao que se dirixa a mesma, sen que sexa necesario motivar a solicitude, xa que este dereito non está vinculado necesariamente á titularidade dun interese por parte do solicitante. A formulación ampla deste dereito, fai que unicamente poda inadmitirse ou denegarse a información solicitada cando concorra algunha causa de inadmisión das establecidas no artigo 18 da Lei 19/2013, ou na información solicitada concorra algún dos límites de acceso á información establecidos nos artigos 14 e 15 da referida Lei.

É necesario lembrar que o obxectivo final da Lei é o escrutinio da acción pública, e iso mediante o coñecemento do proceso de toma de decisións como medio de rendición de contas dos responsables públicos. Por tanto, dende esa perspectiva deben ser analizadas as solicitudes de acceso á información que teñan o seu amparo na mesma.

Os Tribunais de Xustiza xa se pronunciaron no sentido de que o acceso á información debe recoñecerse con carácter amplo, e así, o Xulgado Central do Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, en sentenza nº 93/2017, do 17 de xullo de 2017, establece que o artigo 12 da Lei 19/2013 recoñece do dereito de acceso á información pública a todas as persoas, sen distinción. O Tribunal Supremo en sentenza do 16 de outubro de 2017 (recurso de casación 75/2017) considerou que calquera pronunciamento sobre as causas de inadmisión do artigo 18 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, debe tomar como premisa a formulación ampla e expansiva coa que aparece configurado o dereito de acceso á información na dita Lei, polo que este dereito que poderá exercer sen necesidade de motivar a solicitude, unicamente pode verse limitado naqueles casos en que así sexa necesario pola propia natureza da información que se solicita, derivado do disposto na Constitución Española, ou pola súa entrada en conflito con outros intereses protexidos. En todo caso, a formulación ampla no recoñecemento e na regulación legal do dereito de acceso á información obriga a interpretar de forma estrita, cando non restritiva, tanto as limitacións a ese dereito que se contemplan no artigo 14.1 da Lei 19/2013 como as causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas no artigo 18.1.

No presente caso, o interesado, en representación dunha asociación, solicitou, mediante o correspondente formulario de acceso á información pública, á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, unha información consistente en que se identificaran aos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 ante

a Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de personación nos ditos procedementos, identificando ao seu autor, sen que lle fose notificada resolución expresa á dita solicitude.

Considera o informe da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia remitido, en primeiro lugar, que debe inadmitirse a reclamación por ser a solicitude non de acceso á información pública, senón unha denuncia, xa que a pesar de estar formulado como solicitude de acceso, o que o interesado cualifica como motivación é a posta en coñecemento da Administración dunha serie de feitos que o reclamante considera como conduta incorrecta, desviada ou delitiva.

Non pode aceptarse esta alegación, por canto, se ben é certo que no escrito que acompaña á súa solicitude o reclamante fai denuncias e acusacións contra altos cargos da Xunta de Galicia, non é menos certo que o interesado solicitou un contido (identificación do/s funcionarios públicos -letrado/s- personados en determinados expedientes) e un documento (copia da orde de personación nos ditos expedientes), contidos e documentos que de existir, feito este que analizaremos a continuación, entran claramente dentro do concepto de información pública establecido polo artigo 24 da Lei 1/2016. Por tanto, o feito de que a *motivación* da solicitude, motivación que non é obrigatoria como é sabido, sexa realmente unha denuncia, non pode ser motivo de inadmisión ou de denegación da información solicitada. Corresponde á Administración Autonómica valorar, si considera que o contido da motivación constitúe un ilícito civil ou administrativo, se procede iniciar algún tipo de actuación, e sen que proceda ningún tipo de pronunciamento nese senso por parte da Comisión da Transparencia de Galicia, por carecer de competencias para iso.

A solicitude de que se identifique aos letrados da Xunta de Galicia personados, ao contrario do manifestado no informe da Asesoría, si constitúen claramente información pública, dado que como se recoñecen en distintas resolucións de órganos e control da Transparencia, a identificación dun funcionario, entra claramente no concepto de *datos meramente identificativos relacionados coa organización*, dos que de acordo co disposto no artigo 15.2 da Lei 19/2013, debe concederse o acceso, salvo que no caso concreto prevaleza a protección de datos persoais ou outros dereitos constitucionalmente protexidos sobre o interese público, circunstancias que non se alegan neste caso, polo que debe presumirse que non concorren.

Tampouco é aplicable ao presente caso a disposición adicional primeira 1 da Lei 19/2013 respecto ao acceso á información como se pretende, dado que para que non sexa de aplicación a Lei 19/2013 e o sexa a normativa que rexe o procedemento ante a Xunta Electoral, debe tratarse dun procedemento administrativo *en curso*. No presente caso, ao existir, segundo o informe remitido, resolución da Xunta Electoral, sen que de ningún xeito se xustifique que o procedemento administrativo non esta finalizado, debemos entender que si o está, polo que lle é de aplicación a normativa de Transparencia, aínda que o solicitante teña a condición de interesado, ao non estar no momento da solicitude, o procedemento *en curso*.

Non son aplicables aquí as resolucións de inadmisión desta Comisión, citadas como doutrina polo Director da Asesoría Xurídica, por canto refírense a supostos diferentes. Así no expediente RSCTG 17/2018, solicitábase a realización dunha actuación concreta a un órgano administrativo, e nos expedientes RSCTG 72/2018 e RSCTG 25/2019, solicitábase a iniciación dun expediente sancionador, sen que existira en ningún deses supostos, unha solicitude de acceso á información, como sucede no presente caso.

Considera tamén o informe da Asesoría Xurídica que a solicitude de acceso debe inadmitirse por abusiva, porque as circunstancias concorrentes revelan unha utilización desviada e abusiva da lexislación de transparencia para conseguir outras finalidades. No punto IV das consideracións xurídicas do informe, recoñécese que a petición realizada, illadamente considerada, se non explicitase a motivación que contén, e sen integrala nas teses conspiratorias do reclamante, é inocua e podería ser respondida simplemente indicando que non houbo unha personación formal da asesoría neses procedementos por non ser necesaria, e por tanto non existiu unha específica orde de personación, e as alegacións foron asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como é practica habitual nestes casos.

Do anterior, sen ben pode concluírse que formalmente a información solicitada non existe, non se pode impoñer ao solicitante a carga de coñecer que documentos administrativos existen e cales non, como pretende a Asesoría, e xustificar desta forma a falla de contestación a unha solicitude de acceso. No caso de que a información solicitada non exista, o suxeito obrigado debe responder expresamente á solicitude de acceso, informando de forma clara ao petionario, que a información que se solicita non existe. Non é de aplicación tampouco neste caso a resolución desta Comisión no expediente RSCTG 17/2018 como pretende a Asesoría, por canto como xa se dixo, a petición non tiña por obxecto unha solicitude de acceso á información, nin a resolución no expediente RSCTG 64/2016, no que tampouco existía solicitude de acceso á información, senón unha petición de informe de valoración xurídica sobre un suposto concreto.

No presente caso no que a resposta á solicitude consiste en comunicar ao solicitante que non houbo personación, e que por tanto non houbo orde específica de personación, e que as alegacións presentadas foron asumidas polo director da Asesoría Xurídica, non se pode entender, como se pretende, que a resposta involucre unha valoración xurídica.

Por outra banda, non pode aceptarse que a motivación poda ser causa de denegación (ou de falla de contestación como no presente caso) dunha solicitude de acceso á información. A Lei de forma expresa (artigo 26.4 da Lei 1/2016 e 17.3 da Lei 19/2013) contempla a posibilidade de que o solicitante motive a súa petición, e esa posibilidade, non ten como finalidade averiguar para que vai a utilizar o solicitante a información, xa que pode facelo, de acordo co disposto no artigo 24.2.a) da Lei 1/2016, para o que estime convinte sen mais limitacións das



que se deriven dese ou doutras leis, senón que ten como finalidade que poida servir para ponderar os intereses públicos ou privados concorrentes, que deban prevalecer na difusión dunha información, cando esta está afectada por algún dos límites ao acceso establecidos no artigo 14 da citada Lei 19/2013.

Dende este punto de vista, a información solicitada, que como ben di o informe do director da Asesoría, é inocua, non pode considerarse que se trate dunha solicitude abusiva e non este xustificada coa finalidade da Lei. O reclamante solicita a dita información, no convencemento de que si se houberan personado letrados da Xunta de Galicia nos procedementos ante a Xunta Electoral, se poderían estar tomando decisións públicas contrarias á normativa, ou se podería estar facendo un uso irregular dos recursos públicos. O solicitante por tanto pretende coñecer como se adoptaron unhas decisións concretas que considera incorrectas, e teña razón ou non en consideralas incorrectas, a súa solicitude está xustificada coa finalidade da Lei, dado que pretende coñecer e fiscalizar como se tomaron esas decisións.

En canto á existencia dun interese non obxectivo, senón subxectivo por parte do solicitante, polo feito de que este teña un proceso penal pendente no que a querelante é a Secretaría Xeral de Medios, este feito non pode ser motivo de denegación da información, xa que a Lei non impide a presentación dunha solicitude de acceso con fins ou intereses privados.

Tampouco pode considerarse abusivo o feito de que o interesado presente varias solicitudes de acceso co mesmo contido ante distintos órganos, xa que é obriga de cada un deles resolver sobre o acceso á información que obren no seu poder, ou remitila ao competente no caso de que non a posúa ou non fose elaborada por el.

Por último, esta Comisión non pode entrar a valorar a actuación da Asesoría Xurídica ante a Xunta Electoral xa que non entra dentro das súas competencias, nin comparte ningunha utilización que pretenda crear confusión mediante publicacións de calquera tipo, sobre a admisión a trámite das reclamacións en materia de transparencia, dado que como é sabido, o feito de que se admita a trámite unha reclamación, non presupón, como se pretende facer ver, que a actuación da Administración contra a que se dirixe, non fora conforme a dereito.

En base aos feitos e fundamentos de dereito anteriormente expresados, a Comisión da Transparencia

## **ACORDA**

**Primeiro:** Estimar a reclamación presentada por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) con data do 3 de xaneiro de 2020, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios,

referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña e de obtención de copia da orde de personación.

**Segundo:** Instar á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que, de acordo co disposto no fundamento xurídico quinto, no prazo de dez días proceda a ditar resolución sobre o acceso, respectando os límites dos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, e o artigo 22 da mesma lei, no que fai á formalización do acceso.

**Terceiro:** Instar a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que unha vez ditada a resolución, no prazo máximo de 15 días hábiles, remita a esta Comisión da Transparencia copia do envío ao reclamante da información solicitada.

Contra esta resolución que pon fin á vía administrativa unicamente cabe, en caso de desconformidade, interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á notificación desta resolución, ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

María Dolores Fernández Galiño  
**Presidenta da Comisión da Transparencia.**



**Nº EXPEDIENTE: RSCTG 1/2020**

**RECLAMANTE: D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)**

**Data solicitud acceso á  
información pública  
26/10/2019**

**Data resolución pola  
Administración  
Non consta**

**Data reclamación ante a  
Comisión da Transparencia  
3/1/2020**

**ASUNTO:** Reclamación contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

**TITULAR DA INFORMACIÓN:** Secretaría Xeral de Medios e Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia

**TERCEIROS INTERESADOS:** Non constan

**PROPOSTA DE RESOLUCION**

**Data da proposta de resolución  
21/3/2020**

**SENTIDO DA PROPOSTA  
Estimación**

Visto o expediente RSCTG 1/2020 o instrutor Santiago González Serrano remite a seguinte proposta de resolución para a súa aprobación, se procede, pola Comisión da Transparencia.

Santiago de Compostela, 21 de Abril de 2020

SANTIAGO  
GONZÁLEZ SERRANO  
- 32650145N

Firmado digitalmente por  
SANTIAGO GONZÁLEZ SERRANO  
- 32650145N  
Fecha: 2020.04.21 12:27:32  
+02'00'

Santiago González Serrano

D. Miguel A. Delgado González, Plataforma en  
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de  
Galicia (PLADESEMAPESGA)  
R/Juan Castro Mosquera 28 2º dereita  
15005 A Coruña

### *Proposta de resolución*

Reclamante: D. Miguel A. Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)  
Expediente. Nº **RSCTG 1/2020**

Correo electrónico:

**ASUNTO: Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia na reclamación presentada ao amparo do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno**

Vista á reclamación presentada por D. Miguel A. Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) , mediante escrito que tivo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, e considerando os antecedentes e fundamentos xurídicos que se especifican a continuación, a Comisión da Transparencia na sesión celebrada o día [Haga clic aquí para escribir una fecha.](#), adopta a seguinte resolución:

## ANTECEDENTES

**Primeiro.** D. Miguel A. Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) presentou, mediante escrito con entrada no rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, unha reclamación ao amparo do disposto no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

O reclamante indicaba que se solicitou información sobre identificación dos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 da Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de personación nos procedementos identificando ao seu autor.

O escrito viña acompañado de copia da solicitude presentada, de copia dun acordo da Xunta Electoral Provincial da Coruña e de copia da dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

**Segundo.** Con data do 7 de xaneiro de 2020 déuselle traslado da documentación achegada polo reclamante á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia para que, en cumprimento da normativa de transparencia, achegase informe e copia completa e ordenada do expediente.

A recepción da solicitude pola administración foi o 14 de xaneiro de 2020.

**Terceiro.** Con data 3 de febreiro de 2020 a Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia contesta a petición remitindo o informe solicitado.

A Dirección Xeral da Asesoría Xurídica emite o informe dado que a pesar de que a reclamación se dirixe formalmente contra a falla de contestación dunha solicitude á Secretaría Xeral de Medios, a competencia sobre a materia lle corresponde á dita Asesoría.

O informe considera que a natureza da solicitude e o seu obxecto, son cuestións que non forman parte do dereito de acceso á información pública, tendo a mesma un carácter abusivo, non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei.

Considera que pese a que o escrito de solicitude se tivese cualificado polo recorrente como de información pública, o seu contido real responde ao dunha denuncia consistente en poñer en coñecemento da administración unha serie de feitos que estima constitutivos dunha conduta incorrecta ou desviada, aludindo a que existen "claros datos" de delito.



O que no escrito se engade como motivación, son os feitos que denuncia, polo que debe prevalecer a natureza de denuncia, sendo a solicitude de información meramente instrumental da denuncia que se formula, e non ser por tanto a súa falla de resposta un acto susceptible de reclamación en materia de acceso á información pública.

A circunstancias concorrentes no presente caso, revelan unha utilización desviada e abusiva da lexislación de transparencia para conseguir outras finalidades e a información concreta que solicita o reclamante resulta meramente trivial e non tería esta asesoría xurídica ningún problema en facilitarlla, se ben entende que non está cuberta pola lexislación de transparencia.

A petición de información, de identificación dos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 y 112/2019 da Xunta Electoral Provincial de A Coruña e copia da orde de personación nos procedementos, identificando ao seu autor, illadamente considerada, se non explicitase o escrito a motivación que contén, e sen integrala nas teses conspiratorias do reclamante, é inocua, pois podería ser respondida meramente indicando que non houbo unha personación formal da asesoría da Xunta nos procedementos indicados, nin esta é necesaria, senón que simplemente se efectuaron as alegacións para as que foi emprazada pola propia Xunta Electoral, e non existiu unha específica orde de personación, dado que non resulta necesaria legalmente, sendo as alegacións asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como é practica habitual. Esta contestación non impediría considerar que a información solicitada non ten acomodo realmente no concepto de información pública que recolle a lexislación de transparencia, por canto o solicitante pide un documento que non existe, como é a orde de personación que el presume ditada e o dereito a acceder a documentos inexistentes non forma parte do contido do dereito á información pública, como teñen aclarado diversas resolucións do Consello de Transparencia e da Comisión Galega da Transparencia. A petición debe ser inadmitida por canto o que o reclamante pretende é que se lle confirme a súa tese, ou se lle contradiga, aspectos que desbordan o dereito á información pública.

A identificación dos letrados personados tampouco se pode considerar un contido ou documento que sexa obxecto do dereito á información pública. O interesado non solicita copia dos escritos de alegacións presentados, que lle permitiría coñecer ao seu autor que como parte no procedemento ante a Xunta Electoral podería solicitalos e obtelos ante esta sen necesidade de acudir a unha solicitude de información pública nin de presentación de reclamación ante a Comisión de Transparencia. Neste senso e de acordo coa disposición adicional primeira 1 da Lei 19/2013, ao tratarse do acceso por parte dun interesado a un

documento de alegacións que figura nun procedemento non debe rexerse pola lexislación de transparencia.

Ademais considera que a identificación das autoridades ou persoal que participan nos procedementos non é información pública, senón un dereito distinto que se regula no artigo 53.1.b) da Lei 39/2015, e referido soamente aos interesados nun procedemento, polo que entende que concorre a causa de inadmisión da reclamación de que a información solicitada non existe ou non é constitutiva de información pública. Non se poden entender que o reclamante estea solicitando *información pública* no sentido técnico da normativa en materia de transparencia, dado que a contestación ao solicitante, involucra unha valoración xurídica sobre os feitos que alega.

Entende o informe que a reclamación debe ser desestimada porque a solicitude incorre na causa de inadmisión do artigo 18.1.e) da Lei 19/2013, por ter un carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei, dado que no presente caso, faise unha imputación de feitos delitivos cunha tipificación concreta que, a xuízo do denunciante, deberían xustificar a apertura de dilixencias penais. O contido difamatorio e insultante do escrito resulta elemento de xuízo suficiente para percibir na intención do seu autor un abuso de dereito, tendo en conta que sobrepasa manifestamente os límites normais do exercicio dunha petición de transparencia, e atribúe conspiracións delitivas a todo un conxunto de autoridades públicas.

Así mesmo non pode considerarse que a solicitude formulada estea xustificada coa finalidade da Lei, dado que o seu obxecto real é formular unha tese delitiva conspiratoria e atribuír actuacións que presume a determinados cargos, pretendendo o denunciante expoñer como, ao seu entender, se adoptaron unhas decisións que afirma delitivas, polo que a súa petición non pode ser reconducida a ningunha das finalidades sinaladas na normativa de transparencia.

Non existe ademais un interese xeral obxectivo na divulgación da información solicitada senón dun interese persoal e subxectivo acreditado polo feito de que ten un proceso penal pendente no que a querelante é a Secretaría Xeral de Medios.

Outro indicio do carácter abusivo da petición de información e o seu fundamento nunha finalidade distinta das previstas na lei é a forma de presentación da petición, dado que se presentaron varias solicitudes de acceso co mesmo contido, dirixidas a distintos órganos, como indicamos nos antecedentes. Isto fai ver que o que pretende o denunciante é a difusión das súas teses, ou incluso dificultar o funcionamento dos servizos ou intentar



provocar unha resposta descoordinada da administración, máis que buscar de modo eficiente ou útil unha concreta resposta.

Os datos anteriores deben ser postos en relación coa tese manifestamente irracional que sostén o denunciante sobre os feitos que dan orixe a esta reclamación. So cunha evidente mala fe pode entenderse que os letrados da administración están defendendo a actuación persoal ou privada da Secretaría Xeral de Medios. O agora reclamante presentou unhas denuncias ante a Xunta Electoral Provincial da Coruña sobre campañas institucionais de comunicación contratadas pola administración autonómica e a Xunta Electoral emprazou para contestar á administración autonómica. A asesoría xurídica da Xunta de Galicia contestou defendendo en dereito a actuación da administración autonómica e a resolución da Xunta Electoral en ningún caso aprecia esta a existencia dunha conduta constitutiva de infracción electoral, nin ordena a apertura dun procedemento sancionador, desestimando as peticións do reclamante neste sentido.

De acordo co disposto no artigo 1 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, a asistencia xurídica e o asesoramento en dereito e a representación e defensa en todo tipo de procesos xudiciais e ante órganos administrativos prestada pola asesoría xurídica da Xunta, polo que defender un acto da administración ante unha xunta electoral forma parte da asistencia prevista legalmente, e sen que a Lei esixa dunha específica orde de personarse nun procedemento para facer alegacións cando se cita á administración autonómica, e de feito non existiu esa orde neste caso.

Así mesmo, debe terse en conta a actitude coetánea no tempo do reclamante, que amosa que as súas finalidades son outras ben distintas da transparencia, finalidades nas que a presente reclamación se integra como unha peza máis:

O interesado, no medio dixital *Xornal de Galicia* (instrumento utilizado xunto con PLADESEMAESGA polo reclamante) publica noticias sobre a Secretaría Xeral de Medios e sobre a propia Comisión da Transparencia, baixo títulos enganosos para crear confusión interesada sobre as reclamacións ou denuncias presentadas.

Considera por tanto que a reclamación non pode ser acollida e solicita que se inadmita ou ben, de considerala admisible, que se desestime.

## **FUNDAMENTOS XURÍDICOS**

### **Primeiro. Competencia e normativa**

O artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, de carácter básico na súa práctica totalidade, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información, poderá interpoñerse unha reclamación ante o *Consello de Transparencia e Bo Goberno*, con carácter potestativo e previa a súa impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa mesma lei, na súa disposición adicional cuarta, establece que a resolución da reclamación prevista no artigo 24 corresponderá, nos supostos de resolucións ditadas polas Administracións das Comunidades autónomas e o seu sector público, e polas Entidades Locais comprendidas no seu ámbito territorial, ao órgano independente que determinen as Comunidades Autónomas.

O artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información pública, poderá interpoñerse unha reclamación ante o Valedor do Pobo, correspondendo á Comisión da Transparencia, de acordo co disposto no artigo 33, a resolución das devanditas reclamacións.

### **Segundo. Procedemento aplicable**

O artigo 28.3 da citada Lei 1/2016 establece que o procedemento de reclamación axustarase ao previsto nos parágrafos 2, 3, e 4 do artigo 24 da Lei 19/2013, que establece que as reclamacións contra resolucións en materia de acceso á información, que ten carácter potestativo e previo á impugnación en vía contencioso-administrativa, axustarán a súa tramitación ao disposto na lexislación de procedemento administrativo común en materia de recursos.

### **Terceiro. Dereito de acceso á información pública**

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, recoñece no seu artigo 24 o dereito de todas as persoas a acceder á información pública, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións, do mesmo xeito que a definición contida no artigo 13 da Lei estatal 19/2013 que ten carácter básico.

O concepto de información pública e o dereito de acceso á mesma configúranse de forma ampla tanto na normativa autonómica como na estatal. Os titulares do dereito son todas as persoas, sen que o solicitante estea obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información (art. 26.4 Lei 1/2016, do 18 de xaneiro).

O obxecto da Lei 19/2013, é ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública e regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela actividade (art. 1). No seu

preámbulo sinala que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixos fundamentais de toda acción política e só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións pódese falar do inicio dun proceso no que os poder públicos comezan a responder a unha sociedade que é crítica, esixente e que demanda participación dos poder públicos.

Pola súa banda, a Lei galega 1/2016, sinala na súa Exposición de Motivos que a crecente esixencia cidadá de control público da actuación das administracións aconsella a aprobación dunha norma que supera os anteriores estándares e que se concreta nun texto legal que establece esixencias engadidas de transparencia e acceso á información pública.

#### **Cuarto. Prazo para a interposición do recurso**

O artigo 28.3 da Lei 1/2016, establece que o procedemento das reclamacións fronte ás resolucións en materia de acceso á información pública axustarase ao previsto no artigo 24 da Lei 19/2013.

O artigo 24 da Lei 19/2013 establece que fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso a información poderá interpoñerse unha reclamación con carácter potestativo e previo á súa impugnación na vía contencioso-administrativa.

Esta reclamación interpoñerase no prazo dun mes para contar desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou desde o día seguinte a aquel no que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Tal e como establece o Criterio Interpretativo 1/2016, do Consello de Transparencia e Bo Goberno, de acordo con reiterada doutrina xurisprudencial e coas previsións normativas contidas nos artigos 122 e 124 da Lei 39/2015, poderanse interpoñer recursos de alzada e reposición, respectivamente, respecto de resolucións presuntas en calquera momento fronte a actos que non sexan expresos.

Dado que segundo consta na documentación remitida polo interesado, a súa solicitude de acceso á información presentouse con data do 26 de outubro de 2019, sen que se lle notificase resolución expresa, e a reclamación a presentou con data de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2019, tendo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 2 de xaneiro de 2020, remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia e remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia, polo que debe admitirse por estar presentada en prazo.



### Quinto.- Análise do expediente

O dereito de acceso á información pública está configurado na Lei como un dereito de amplo ámbito obxectivo e subxectivo e, especialmente, o concepto de información pública e, por tanto o posible obxecto dunha solicitude de información que a Lei consagra é todo contido ou documento que obre en poder dun organismo suxeito á norma que fose obtido ou elaborado no exercicio das súas funcións. Por tanto, pode ser obxecto dunha solicitude de acceso, calquera información que posúa o organismo ou entidade ao que se dirixa a mesma, sen que sexa necesario motivar a solicitude, xa que este dereito non está vinculado necesariamente á titularidade dun interese por parte do solicitante. A formulación ampla deste dereito, fai que unicamente poda inadmitirse ou denegarse a información solicitada cando concorra algunha causa de inadmisión das establecidas no artigo 18 da Lei 19/2013, ou na información solicitada concorra algún dos límites de acceso á información establecidos nos artigos 14 e 15 da referida Lei e se motive adecuadamente a súa concorrencia.

É necesario lembrar que o obxectivo final da Lei é o escrutinio da acción pública, e iso mediante o coñecemento do proceso de toma de decisións como medio de rendición de contas dos responsables públicos. Por tanto, dende esa perspectiva deben ser analizadas as solicitudes de acceso á información que teñan o seu amparo na mesma.

Os Tribunais de Xustiza xa se pronunciaron no sentido de que o acceso á información debe recoñecerse con carácter amplo, e así, o Xulgado Central do Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, en sentenza nº 93/2017, do 17 de xullo de 2017, establece que o artigo 12 da Lei 19/2013 recoñece do dereito de acceso á información pública a todas as persoas, sen distinción. O Tribunal Supremo en sentenza do 16 de outubro de 2017 (recurso de casación 75/2017) considerou que calquera pronunciamento sobre as causas de inadmisión do artigo 18 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, debe tomar como premisa a formulación ampla e expansiva coa que aparece configurado o dereito de acceso á información na dita Lei, polo que este dereito que poderá exercerse sen necesidade de motivar a solicitude, unicamente pode verse limitado naqueles casos en que así sexa necesario pola propia natureza da información que se solicita, derivado do disposto na Constitución Española, ou pola súa entrada en conflito con outros intereses protexidos. En todo caso, a formulación ampla no recoñecemento e na regulación legal do dereito de acceso á información obriga a interpretar de forma estrita, cando non restritiva, tanto as limitacións a ese dereito que se contemplan no artigo 14.1 da Lei 19/2013 como as causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas no artigo 18.1.

No presente caso, o interesado, en representación dunha asociación, solicitou, mediante o correspondente formulario de acceso á información pública, á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, unha información consistente en que se identificaran aos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 ante

a Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de personación nos ditos procedementos, identificando ao seu autor, sen que lle fose notificada resolución expresa á dita solicitude.

Considera o informe da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia remitido, en primeiro lugar, que debe inadmitirse a reclamación por ser a solicitude non de acceso á información pública, senón unha denuncia, xa que a pesar de estar formulado como solicitude de acceso, o que o interesado cualifica como motivación é a posta en coñecemento da Administración dunha serie de feitos que o reclamante considera como conduta incorrecta, desviada ou delitiva.

Non pode aceptarse esta alegación, por canto, se ben é certo que no escrito que acompaña á súa solicitude o reclamante fai denuncias e acusacións contra altos cargos da Xunta de Galicia, non é menos certo que o interesado solicitou un contido (identificación do/s funcionarios públicos -letrado/s- personados en determinados expedientes) e un documento (copia da orde de personación nos ditos expedientes), contidos e documentos que de existir, feito este que analizaremos a continuación, entran claramente dentro do concepto de información pública establecido polo artigo 24 da Lei 1/2016. Por tanto, o feito de que a *motivación* da solicitude, motivación que non é obrigatoria como é sabido, sexa realmente unha denuncia, non pode ser motivo de inadmisión ou de denegación da información solicitada. Corresponde á Administración Autonómica valorar, si considera que o contido da motivación constitúe un ilícito civil ou administrativo, se procede iniciar algún tipo de actuación, e sen que proceda ningún tipo de pronunciamento nese senso por parte da Comisión da Transparencia de Galicia, por carecer de competencias para iso.

A solicitude de que se identifique aos letrados da Xunta de Galicia personados, ao contrario do manifestado no informe da Asesoría, si constitúen claramente información pública, dado que como se recoñecen en distintas resolucións de órganos e control da Transparencia, a identificación dun funcionario, entra claramente no concepto de *datos meramente identificativos relacionados coa organización*, dos que de acordo co disposto no artigo 15.2 da Lei 19/2013, polo que debe concederse o acceso, salvo que no caso concreto prevaleza a protección de datos persoais ou outros dereitos constitucionalmente protexidos sobre o interese público, circunstancias que non se alegan neste caso, polo que debe presumirse que non concorren.

Tampouco é aplicable ao presente caso a disposición adicional primeira 1 da Lei 19/2013 respecto ao acceso á información como se pretende, dado que para que non sexa de aplicación a Lei 19/2013 e o sexa a normativa que rexe o procedemento ante a Xunta Electoral, debe tratarse dun procedemento administrativo *en curso*. No presente caso, ao existir, segundo o informe remitido, resolución da Xunta Electoral, sen que de ningún xeito se xustifique que o procedemento administrativo non esta finalizado, debemos entender que si



o está, polo que lle é de aplicación a normativa de Transparencia, aínda que o solicitante teña a condición de interesado, ao non estar no momento da solicitude, o procedemento *en curso*.

Non son aplicables aquí as resolucións de inadmisión desta Comisión, citadas como doutrina polo Director da Asesoría Xurídica, por canto refírense a supostos diferentes. Así no expediente RSCTG 17/2018, solicitábase a realización dunha actuación concreta a un órgano administrativo, e nos expedientes RSCTG 72/2018 e RSCTG 25/2019, solicitábase a iniciación dun expediente sancionador, sen que existira en ningún deses supostos, unha solicitude de acceso á información, como sucede no presente caso.

Considera tamén o informe da Asesoría Xurídica que a solicitude de acceso debe inadmitirse por abusiva, porque as circunstancias concorrentes revelan unha utilización desviada e abusiva da lexislación de transparencia para conseguir outras finalidades. No punto IV das consideracións xurídicas do informe, recoñécese que a petición realizada, illadamente considerada, se non explicitase a motivación que contén, e sen integrala nas teses conspiratorias do reclamante, é inocua e podería ser respondida simplemente indicando que non houbo unha personación formal da asesoría neses procedementos por non ser necesaria, e por tanto non existiu unha específica orde de personación, e as alegacións foron asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como é practica habitual nestes casos.

Do anterior, sen ben pode concluírse que formalmente a información solicitada non existe, non se pode impoñer ao solicitante a carga de coñecer que documentos administrativos existen e cales non, como pretende a Asesoría, e xustificar desta forma a falla de contestación a unha solicitude de acceso. No caso de que a información solicitada non exista, o suxeito obrigado debe responder expresamente á solicitude de acceso, informando de forma clara ao petionario, que a información que se solicita non existe. Non é de aplicación tampouco neste caso a resolución desta Comisión no expediente RSCTG 17/2018 como pretende a Asesoría, por canto como xa se dixo, a petición non tiña por obxecto unha solicitude de acceso á información, nin a resolución no expediente RSCTG 64/2016, no que tampouco existía solicitude de acceso á información, senón unha petición de informe de valoración xurídica sobre un suposto concreto.

No presente caso no que a resposta á solicitude consiste en comunicar ao solicitante que non houbo personación, e que por tanto non houbo orde específica de personación, e que as alegacións presentadas foron asumidas polo director da Asesoría Xurídica, non se pode entender, como se pretende, que a resposta involucre unha valoración xurídica.

Por outra banda, non pode aceptarse que a motivación poda ser causa de denegación (ou de falla de contestación como no presente caso) dunha solicitude de acceso á información. A Lei de forma expresa (artigo 26.4 da Lei 1/2016 e 17.3 da Lei 19/2013) contempla a posibilidade

de que o solicitante motive a súa petición, e esa posibilidade, non ten como finalidade averiguar para que vai a utilizar o solicitante a información, xa que pode facelo, de acordo co disposto no artigo 24.2.a) da Lei 1/2016, para o que estime convinte sen mais limitacións das que se deriven desa ou doutras leis, senón que ten como finalidade que poida servir para ponderar os intereses públicos ou privados concorrentes, que deban prevalecer na difusión dunha información, cando esta está afectada por algún dos límites ao acceso establecidos no artigo 14 da citada Lei 19/2013.

Dende este punto de vista, a información solicitada, que como ben di o informe do director da Asesoría, é inocua, non pode considerarse que se trate dunha solicitude abusiva e non este xustificada coa finalidade da Lei. O solicitante por tanto pretende coñecer como se adoptaron unhas decisións concretas, o que está xustificado coa finalidade da Lei, dado que pretende coñecer e fiscalizar como se tomaron esas decisións.

En canto á existencia dun interese non obxectivo, senón subxectivo por parte do solicitante, polo feito de que este teña un proceso penal pendente no que a querelante é a Secretaría Xeral de Medios, este feito non pode ser motivo de denegación da información, xa que a Lei non impide a presentación dunha solicitude de acceso con fins ou intereses privados.

Tampouco pode considerarse abusivo o feito de que o interesado presente varias solicitudes de acceso co mesmo contido ante distintos órganos, xa que é obriga de cada un deles resolver sobre o acceso á información que obren no seu poder, ou remítala ao competente no caso de que non a posúa ou non fose elaborada por el.

Por último, esta Comisión non pode entrar a valorar a actuación da Asesoría Xurídica ante a Xunta Electoral xa que non entra dentro das súas competencias, nin comparte ningunha utilización que pretenda crear confusión mediante publicacións de calquera tipo, sobre a admisión a trámite das reclamacións en materia de transparencia, dado que como é sabido, o feito de que se admita a trámite unha reclamación, non presupón, como se pretende facer ver, que a actuación da Administración contra a que se dirixe, non fora conforme a dereito.

En base aos feitos e fundamentos de dereito anteriormente expresados, a Comisión da Transparencia

## **ACORDA**

**Primeiro:** Estimar a reclamación presentada por D. Miguel A. Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) con data do 3 de xaneiro de 2020, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios,

referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña e de obtención de copia da orde de personación.

**Segundo:** Instar á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que, de acordo co disposto no fundamento xurídico quinto, no prazo de dez días proceda a ditar resolución sobre o acceso, respectando os límites dos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, e o artigo 22 da mesma lei, no que fai á formalización do acceso.

**Terceiro:** Instar a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que unha vez ditada a resolución, no prazo máximo de 15 días hábiles, remita a esta Comisión da Transparencia copia do envío ao reclamante da información solicitada.

Contra esta resolución que pon fin á vía administrativa unicamente cabe, en caso de desconformidade, interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á notificación desta resolución, ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

María Dolores Fernández Galiño  
**Presidenta da Comisión da Transparencia.**



## **ORDE DO DÍA. COMISIÓN DA TRANSPARENCIA DE GALICIA. XL SESIÓN**

Seguindo as indicacións da presidenta da Comisión da Transparencia **CONVOCO** a **XL** sesión da Comisión da Transparencia, que terá lugar mediante videoconferencia<sup>1</sup> o 28 de abril de 2020 ás 12 horas en primeira convocatoria e 12.15 h en segunda, coa seguinte **orde do día**:

- 1) Saúda da presidenta.
- 2) Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
- 3) Resolución se procede dos seguintes expedientes tramitados: RSCTG/1/20, RSCTG/16/20, RSCTG/17/20, RSCTG/19/20, RSCTG/20/20, RSCTG/24/20, RSCTG/26/20, RSCTG/27/20, RSCTG/30/20, RSCTG/32/20, RSCTG/34/20 e RSCTG/35/20,
- 4) Determinación da data da próxima reunión da Comisión.
- 5) Rogos e preguntas.

Santiago de Compostela,

SANTIAGO

GONZÁLEZ

SERRANO -

32650145N

Santiago González Serrano

**Secretario da Comisión da Transparencia**

Firmado digitalmente por

SANTIAGO GONZÁLEZ

SERRANO - 32650145N

Fecha: 2020.04.21

13:32:08 +02'00'

---

<sup>1</sup> Artigo 14.2 do Regulamento interno da Comisión da Transparencia de Galicia e artigo 17.2 Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.

REXISTRO XERAL DO VALEDOR DO POBO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
DATA: 29/04/2020  
SAIDA: 4409/20

Secretaría Xeral de Medios  
Presidencia da Xunta de Galicia  
Edificio Administrativo San Caetano  
15781 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Reclamante: D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)  
Expediente. Nº **RSCTG 1/2020**

Correo electrónico: [prensa@xornalgalicia.com](mailto:prensa@xornalgalicia.com)

**ASUNTO: Resolución da Comisión da Transparencia de Galicia na reclamación presentada ao amparo do artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno**

Vista á reclamación presentada por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), mediante escrito que tivo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, e considerando os antecedentes e fundamentos xurídicos que se especifican a continuación, a Comisión da Transparencia na sesión celebrada o día 28 de abril de 2020.

**ANTECEDENTES**

**Primeiro.** D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) presentou, mediante escrito con entrada no rexistro do Valedor do Pobo o 3 de xaneiro de 2020, unha reclamación ao amparo do disposto no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios, referente a identificación de letrados da Xunta de Galicia en determinados expedientes da Xunta Electoral Provincial da Coruña.

O reclamante indicaba que se solicitou información sobre identificación dos letrados da Xunta de Galicia persoados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 da Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de persoación nos procedementos identificando ao seu autor.

O escrito viña acompañado de copia da solicitude presentada, de copia dun acordo da Xunta Electoral Provincial da Coruña e de copia da dunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

**Segundo.** Con data do 7 de xaneiro de 2020 déuselle traslado da documentación achegada polo reclamante á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia para que, en cumprimento da normativa de transparencia, achegase informe e copia completa e ordenada do expediente.

A recepción da solicitude pola administración foi o 14 de xaneiro de 2020.

**Terceiro.** Con data 3 de febreiro de 2020 a Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia contesta a petición remitindo o informe solicitado.

A Dirección Xeral da Asesoría Xurídica emite o informe dado que, a pesar de que a reclamación se dirixe formalmente contra a falla de contestación dunha solicitude á Secretaría Xeral de Medios, a competencia sobre a materia corresponde á dita Asesoría.

O informe considera que dada a natureza da solicitude e o seu obxecto, son cuestións que non forman parte do dereito de acceso á información pública, tendo a mesma un carácter abusivo, non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei.

Considera que pese a que o escrito de solicitude se tivese cualificado polo recorrente como de información pública, o seu contido real responde ao dunha denuncia consistente en poñer en coñecemento da administración unha serie de feitos que estima constitutivos dunha conduta incorrecta ou desviada, aludindo a que existen "claros datos" de delito.

O que no escrito se engade como motivación, son os feitos que denuncia, polo que debe prevalecer a natureza de denuncia, sendo a solicitude de información meramente instrumental da denuncia que se formula, e non ser por tanto a súa falta de resposta un acto susceptible de reclamación en materia de acceso á información pública.

A petición de información, de identificación dos letrados da Xunta de Galicia personados nos expedientes da Xunta Electoral Provincial de A Coruña e copia da orde de persoación nos procedementos é unha información que non existe. Non houbo unha persoación formal, xa que non resulta necesaria legalmente, sendo as alegacións asumidas e asinadas polo propio director xeral da Asesoría Xurídica Xeral, como é practica habitual, polo que considera a Asesoría que o dereito a acceder a documentos inexistentes non forma parte do contido do dereito á información pública e a petición debe ser inadmitida.



Ademais considera que a identificación das autoridades ou persoal que participan nos procedementos non é información pública, senón un dereito distinto que se regula no artigo 53.1.b) da Lei 39/2015, e referido soamente aos interesados nun procedemento.

Entende o informe que a reclamación debe ser desestimada porque a solicitude incorre na causa de inadmisión do artigo 18.1.e) da Lei 19/2013, por ter un carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia da Lei, dado que fai unha imputación de feitos delitivos cunha tipificación concreta que, a xuízo do denunciante, deberían xustificar a apertura de dilixencias penais. O contido difamatorio e insultante do escrito resulta elemento de xuízo suficiente para percibir na intención do seu autor un abuso de dereito, tendo en conta que sobrepasa manifestamente os límites normais do exercicio dunha petición de transparencia, e atribúe conspiracións delitivas a todo un conxunto de autoridades públicas, polo que non pode considerarse que a solicitude formulada estea xustificada coa finalidade da Lei, nin existe ademais un interese xeral obxectivo na divulgación da información solicitada.

Considera por tanto que a reclamación non pode ser acollida e solicita que se inadmita ou ben, de considerala admisible, que se desestime.

## FUNDAMENTOS XURÍDICOS

### Primeiro. Competencia e normativa

O artigo 24 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, de carácter básico na súa práctica totalidade, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información, poderá interpoñerse unha reclamación ante o *Consello de Transparencia e Bo Goberno*, con carácter potestativo e previa a súa impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa mesma lei, na súa disposición adicional cuarta, establece que a resolución da reclamación prevista no artigo 24 corresponderá, nos supostos de resolucións ditadas polas Administracións das Comunidades autónomas e o seu sector público, e polas Entidades Locais comprendidas no seu ámbito territorial, ao órgano independente que determinen as Comunidades Autónomas.

O artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que contra toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información pública, poderá interpoñerse unha reclamación ante o Valedor do Pobo, correspondendo á Comisión da Transparencia, de acordo co disposto no artigo 33, a resolución das devanditas reclamacións.

## **Segundo. Procedemento aplicable**

O artigo 28.3 da citada Lei 1/2016 establece que o procedemento de reclamación axustarase ao previsto nos parágrafos 2, 3, e 4 do artigo 24 da Lei 19/2013, que establece que as reclamacións contra resolucións en materia de acceso á información, que ten carácter potestativo e previo á impugnación en vía contencioso-administrativa, axustarán a súa tramitación ao disposto na lexislación de procedemento administrativo común en materia de recursos.

## **Terceiro. Dereito de acceso á información pública**

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, recoñece no seu artigo 24 o dereito de todas as persoas a acceder á información pública, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións, do mesmo xeito que a definición contida no artigo 13 da Lei estatal 19/2013 que ten carácter básico.

O concepto de información pública e o dereito de acceso á mesma configúranse de forma ampla tanto na normativa autonómica como na estatal. Os titulares do dereito son todas as persoas, sen que o solicitante estea obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información (art. 26.4 Lei 1/2016, do 18 de xaneiro).

O obxecto da Lei 19/2013, é ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública e regular e garantir o dereito de acceso a información relativa a aquela actividade (art. 1). No seu preámbulo sinala que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixos fundamentais de toda acción política e só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións pódese falar do inicio dun proceso no que os poder públicos comezan a responder a unha sociedade que é crítica, esixente e que demanda participación dos poder públicos.

Pola súa banda, a Lei galega 1/2016, sinala na súa Exposición de Motivos que a crecente existencia cidadá de control público da actuación das administracións aconsella a aprobación dunha norma que supera os anteriores estándares e que se concreta nun texto legal que establece esixencias engadidas de transparencia e acceso á información pública.

#### **Cuarto. Prazo para a interposición do recurso**

O artigo 28.3 da Lei 1/2016, establece que o procedemento das reclamacións fronte ás resolucións en materia de acceso á información pública axustarase ao previsto no artigo 24 da Lei 19/2013.

O artigo 24 da Lei 19/2013 establece que fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso a información poderá interpoñerse unha reclamación con carácter potestativo e previo á súa impugnación na vía contencioso-administrativa.

Esta reclamación interpoñerase no prazo dun mes para contar desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou desde o día seguinte a aquel no que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Tal e como establece o Criterio Interpretativo 1/2016, do Consello de Transparencia e Bo Goberno, de acordo con reiterada doutrina xurisprudencial e coas previsións normativas contidas nos artigos 122 e 124 da Lei 39/2015, poderanse interpoñer recursos de alzada e reposición, respectivamente, respecto de resolucións presuntas en calquera momento fronte a actos que non sexan expresos.

Dado que segundo consta na documentación remitida polo interesado, a súa solicitude de acceso á información presentouse con data do 26 de outubro de 2019, sen que se lle notificase resolución expresa, e a reclamación a presentou con data de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia do 29 de decembro de 2019, tendo entrada no Rexistro do Valedor do Pobo o 2 de xaneiro de 2020, remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia e remitida pola Secretaría Xeral da Presidencia, polo que debe admitirse por estar presentada en prazo.

#### **Quinto.- Análise do expediente**

O dereito de acceso á información pública está configurado na Lei como un dereito de amplo ámbito obxectivo e subxectivo e, especialmente, o concepto de información pública e, por tanto o posible obxecto dunha solicitude de información que a Lei consagra é todo contido ou documento que obre en poder dun organismo suxeito á norma que fose obtido ou elaborado no exercicio das súas funcións. Por tanto, pode ser obxecto dunha solicitude de acceso, calquera información que posúa o organismo ou entidade ao que se dirixa a mesma, sen que sexa necesario motivar a solicitude, xa que este dereito non está vinculado necesariamente á titularidade dun interese por parte do solicitante. A formulación ampla deste dereito, fai que unicamente poda inadmitirse ou denegarse a información solicitada cando concorra algunha causa de inadmisión das establecidas no artigo 18 da Lei 19/2013, ou na información solicitada



concorra algún dos límites de acceso á información establecidos nos artigos 14 e 15 da referida Lei.

É necesario lembrar que o obxectivo final da Lei é o escrutinio da acción pública, e iso mediante o coñecemento do proceso de toma de decisións como medio de rendición de contas dos responsables públicos. Por tanto, dende esa perspectiva deben ser analizadas as solicitudes de acceso á información que teñan o seu amparo na mesma.

Os Tribunais de Xustiza xa se pronunciaron no sentido de que o acceso á información debe recoñecerse con carácter amplo, e así, o Xulgado Central do Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, en sentenza nº 93/2017, do 17 de xullo de 2017, establece que o artigo 12 da Lei 19/2013 recoñece do dereito de acceso á información pública a todas as persoas, sen distinción. O Tribunal Supremo en sentenza do 16 de outubro de 2017 (recurso de casación 75/2017) considerou que calquera pronunciamento sobre as causas de inadmisión do artigo 18 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, debe tomar como premisa a formulación ampla e expansiva coa que aparece configurado o dereito de acceso á información na dita Lei, polo que este dereito que poderá exercerse sen necesidade de motivar a solicitude, unicamente pode verse limitado naqueles casos en que así sexa necesario pola propia natureza da información que se solicita, derivado do disposto na Constitución Española, ou pola súa entrada en conflito con outros intereses protexidos. En todo caso, a formulación ampla no recoñecemento e na regulación legal do dereito de acceso á información obriga a interpretar de forma estrita, cando non restritiva, tanto as limitacións a ese dereito que se contemplan no artigo 14.1 da Lei 19/2013 como as causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas no artigo 18.1.

No presente caso, o interesado, en representación dunha asociación, solicitou, mediante o correspondente formulario de acceso á información pública, á Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, unha información consistente en que se identificaran aos letrados da Xunta de Galicia persoados nos expedientes 52/2019, 111/2019 e 112/2019 ante a Xunta Electoral Provincial da Coruña e copia da orde de persoación nos ditos procedementos, identificando ao seu autor, sen que lle fose notificada resolución expresa á dita solicitude.

Considera o informe da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia remitido, en primeiro lugar, que debe inadmitirse a reclamación por ser a solicitude non de acceso á información pública, senón unha denuncia, xa que a pesar de estar formulado como solicitude de acceso, o que o interesado cualifica como motivación é a posta en coñecemento da Administración dunha serie de feitos que o reclamante considera como conduta incorrecta, desviada ou delitiva.

O interesado solicitou un contido (identificación do/s funcionarios públicos -letrado/s- personados en determinados expedientes) e un documento (copia da orde de personación

nos ditos expedientes), contidos e documentos que de existir, feito este que analizaremos a continuación, entran claramente dentro do concepto de información pública establecido polo artigo 24 da Lei 1/2016. Por tanto, o feito de que a *motivación* da solicitude, motivación que non é obrigatoria como é sabido, sexa realmente unha denuncia, non pode ser motivo de inadmisión ou de denegación da información solicitada.

A solicitude de identificación dun empregado público, constitúen claramente información pública, dado que, como se recoñecen en distintas resolucións de órganos e control da Transparencia, entra claramente no concepto de *datos meramente identificativos relacionados coa organización*, dos que de acordo co disposto no artigo 15.2 da Lei 19/2013, debe concederse o acceso, salvo que no caso concreto prevaleza a protección de datos persoais ou outros dereitos constitucionalmente protexidos sobre o interese público, circunstancias que non se alegan neste caso, polo que debe presumirse que non concorren.

Non se pode considerar aplicable ao presente caso a disposición adicional primeira 1 da Lei 19/2013 respecto ao acceso á aplicación da normativa reguladora do correspondente procedemento administrativo en vez da normativa en materia de transparencia, dado que para que non sexa de aplicación a Lei 19/2013 e o sexa a normativa que rexe o procedemento ante a Xunta Electoral, debe tratarse dun procedemento administrativo *en curso*. No presente caso, ao existir, segundo o informe remitido, resolución da Xunta Electoral, sen que de ningún xeito se xustifique que o procedemento administrativo non esta finalizado, debemos entender que si o está, polo que lle é de aplicación a normativa de Transparencia, aínda que o solicitante teña a condición de interesado, ao non estar no momento da solicitude, o procedemento *en curso*.

Dito o anterior, débese ter en conta que segundo o informe da Asesoría Xurídica, a información solicitada non existe, por canto no procedemento sobre o que se solicita a información non procede a persoación de letrado, e por tanto non existiu orde de persoación algunha, sendo as alegacións presentadas no procedemento, asumidas polo director da Asesoría Xurídica. Nos casos nos que a información solicitada polo interesado non exista, o suxeito obrigado debe responder expresamente á solicitude de acceso, informando de forma clara ao petionario, que a información que se solicita non existe, quedando deste xeito satisfeito o dereito de acceso á información, sen que se poida considerar que a comunicación desa inexistencia, involucre unha valoración xurídica.

En base aos feitos e fundamentos de dereito anteriormente expresados, a Comisión da Transparencia,



## ACORDA

**Primeiro:** Estimar a reclamación presentada por D. Miguel A Delgado González, en representación da Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) con data do 3 de xaneiro de 2020, contra a desestimación por silencio administrativo, da súa solicitude de acceso á información ante a Secretaría Xeral de Medios.

**Segundo:** Instar á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que, de acordo co disposto no fundamento xurídico quinto, no prazo de dez días proceda a ditar resolución expresa sobre a solicitude de acceso, mediante a comunicación da información que proceda.

**Terceiro:** Instar a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, a que unha vez ditada a resolución, no prazo máximo de 15 días hábiles, remita a esta Comisión da Transparencia copia do envío ao reclamante da dita comunicación.

Contra esta resolución que pon fin á vía administrativa unicamente cabe, en caso de desconformidade, interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses<sup>1</sup>, contados desde o día seguinte á notificación desta resolución, ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 10.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Firmado digitalmente por  
76706870F MARIA DOLORES  
FERNANDEZ (R: S6500009C)  
Fecha: 2020.04.29 12:17:01 +02'00'

María Dolores Fernández Galiño  
**Presidenta da Comisión da Transparencia.**

---

<sup>1</sup> Debese ter en conta que de acordo co disposto na disposición adicional segunda do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, os prazos procesuais están interrompidos e suspendidos para todas as ordes xurisdicionais, ata que non que perda vixencia o citado Real Decreto, renovándose o cómputo de prazos nese momento.